C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 102

celebrada el martes, 24 de junio de 1980

ORDEN DEL DIA

Enmiendas del Senado:

- Al proyecto de ley de inspección y recaudación de la Seguridad Social.
- Al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la vivienda.
- Al proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
- Al proyecto de Ley de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo.

Dictámenes de Comisiones:

- De la Comisión de Trabajo, sobre la proposición de ley básica de empleo («Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie B, núm. 7-III, de 6 de junio de 1980).

Proposiciones no de ley:

- Sobre nueva acción terrorista coordinada y dirigida por ETA (político-militar) en Andalucía y el País Valenciano.

Dictámenes de Comisiones:

- De la Comisión de Trabajo, sobre la proposición de ley básica de empleo (continuación).
- Votación de conjunto del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» núm. 103, del 25 de junio de 1980.)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.

Antes de entrar en el orden del día el señor Presidente da cuenta de las modificaciones que se introducen en aquél, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces en la reunión que ésta acaba de celebrar. Asimismo informa a la Cámara de un error padecido en determinado dato que se ha hecho figurar en el dictamen de la ley que acaba de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», relativa al régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal, error que debería rectificarse si la Cámara está conforme. La Cámara muestra su asentimiento.

Se entra en el orden del día.

Enmiendas del Senado:

	Página
—Al proyecto de Ley de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social	6653

Sin discusión fueron aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado a los artículos 1.º, 2.º y 4.º y rechazadas las propuestas a los artículos 5.º y 6.º

En relación con el artículo 11 (antiguo) 10 (moderno), el señor Vida Soria (G. P. Socialista del Congreso) da cuenta de una errata en su texto, que el señor Presidente aclara que ha sido subsanada por la enmienda del Senado. A continuación, el señor Fra-ga Iribarne (G. P. de Coalición Democrática) se manifiesta en contra de la enmien-

da del Senado. Seguidamente fueron aceptadas las enmiendas a los artículos 10, 11, 12, 13 y 14. También fueron aceptadas las enmiendas del Senado al artículo 18 y a la Disposición transitoria tercera. El señor Presidente declara definitivamente aprobado el proyecto de ley en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Senado que han sido aceptadas.

	Página
—Al proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a la Vivienda	6656

Fueron rechazadas las enmiendas del Senado a los artículos 2.º, 4.º y 7.º A continuación fueron aceptadas las enmiendas del Senado al artículo 8.º y al primer párrafo de la Disposición final.

En relación con la enmienda del Senado de adición de un párrafo al número 2 de la Disposición final, consume un turno en contra el señor Pérez Royo (G. P. Comunista). A favor de dicha enmienda interviene el señor Rodríguez-Miranda Gómez (G. P. Centrista). Para rectificar interviene nuevamente el señor Pérez Royo. A continuación fue aprobada esta enmienda. También fue aprobada otra enmienda del Senado de incorporación de una Disposición adicional nueva. El señor Presidente declara aprobado definitivamente este proyecto de ley con la incorporación de las enmiendas del Senado aprobadas anteriormente.

	Página
—Al proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa	6657

El señor Presidente da cuenta de que existen enmiendas del Senado al artículo 5.º, a la

Disposición transitoria segunda y al cambio de sistemática en orden a la ubicación de la Disposición final, Disposición derogatoria y las Disposiciones transitorias.

El señor Solé Tura (G. P. Comunista) hace determinadas observaciones en relación con la ubicación del texto que figura como Disposición transitoria primera. Después de las aclaraciones que le hace el señor Presidente, fueron aceptadas todas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley. El señor Presidente anuncia que la votación de totalidad de este proyecto de Ley Orgánica tendrá lugar esta tarde.

Página

—Al proyecto de Ley de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo 6658

Sin discusión fueron aprobadas las enmiendas del Senado al artículo 2.º de este proyecto de ley, que son las únicas formuladas por dicha Cámara. El señor Presidente declara así aprobado definitivamente este proyecto de ley.

Dictámenes de Comisiones:

Página

—De la Comisión de Trabajo, sobre la proposición de ley básica de empleo 6658

El señor Presidente hace determinadas observaciones en relación con la enmienda a la totalidad mantenida por el G. P. Andalucista, tratándose, como se trata, de una proposición de ley. El señor Aguilar Moreno (G. P. Andalucista) hace algunas aclaraciones a la tesis sostenida por el señor Presidente. En consecuencia, el señor Presidente declara que, en definitiva, de lo que se trata es de una enmienda de oposición al texto alternativo y de sostenimiento del texto originario. El señor Aguilar Navarro se muestra conforme con este planteamiento expuesto finalmente por el señor Presidente, por lo que éste concede el uso de la palabra al señor Aguilar Moreno para la defensa de la enmienda en los términos expuestos. El señor Aguilar Moreno pasa se-

guidamente a defender dicha enmienda. Turno en contra del señor Moreno García (G. P. Centrista). Nuevas observaciones del señor Presidente a propósito de las dos intervenciones habidas en relación con esta enmienda. A continuación, en turno de portavoces y sobre el fondo de la cuestión planteada, intervienen los señores Camacho Abad (G. P. Comunista) y Almunia Amann (G. P. Socialista del Congreso). Fue rechazada la enmienda del G. P. Andalucista.

Página

Artículo 1.º 6664

Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen. Para explicar el voto intervienen los señores Camacho Abad (G. P. Comunista) y Cuartas Galván (G. P. Centrista).

Página

Artículo 2.º 6669

El señor Pérez Royo defiende una enmienda del G. P. Comunista. Turno en contra del señor Fernández Arias (G. P. Centrista). Para rectificar intervienen nuevamente estos dos señores Diputados. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen. Para explicar el voto interviene el señor Valentín Antón (G. P. Socialistas de Cataluña). El señor Castellano Cardallia-guet (G. P. Socialista del Congreso) hace notar la omisión de una palabra en el texto, debido, sin duda, a una errata. La Cámara se muestra conforme con que se subsane esta errata. A continuación explican el voto los señores Moreno García (G. P. Centrista) y Pérez Royo.

Página

Artículo 3.º 6676

El señor Almunia Amann (G. P. Socialista del Congreso) defiende una enmienda. Turno en contra del señor Moreno García, quien, finalmente, sugiere una enmienda transaccional. Para rectificar intervienen nuevamente estos dos señores Diputados. Se admite a trámite la enmienda transaccional. Fue rechazada la enmienda del G. P. Socialista del Congreso y aprobada la transaccional pro-

puesta por el G. P. Centrista. Fue aprobado a continuación el texto del dictamen, que lleva incorporado el de la enmienda transaccional antes aprobada. El señor Camacho Abad explica el voto del G. P. Comunista.

Página

Artículo 4.º 6679

Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen.

Se suspende la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Proposiciones no de ley:

Página

—**Sobre nueva acción terrorista coordinada y dirigida por ETA (político-militar) en Andalucía y el País Valenciano (presentada por los G. P. Socialista del Congreso, Socialistas de Cataluña y Socialista Vasco) 6679**

El señor Presidente recuerda que, según lo manifestado por él esta mañana, por acuerdo de la Junta de Portavoces se ha incluido en el orden del día el debate y votación de esta proposición no de ley como primer asunto de la sesión de la tarde. Por consiguiente, se entra en el examen de dicha proposición.

El señor Solchaga Catalán (G. P. Socialista Vasco) da lectura de esta proposición no de ley y pasa a su defensa. En turno de representantes de Grupos Parlamentarios, y para fijar su posición sobre esta proposición no de ley, intervienen los señores Arredonda Crecente (G. P. Andalucista), Fraga Iribarne (G. P. de Coalición Democrática), Bandrés Molet (G. P. Mixto) y Solé Tura (G. P. Comunista), quien formula una enmienda a la proposición no de ley; Peces-Barba Martínez (G. P. Socialista del Congreso) y Jiménez Blanco (G. P. Centrista).

A continuación hace uso de la palabra sobre el tema el señor Ministro del Interior (Ro-

són Pérez). A petición del señor Presidente, el señor Solchaga Catalán declara que su Grupo acepta la enmienda del G. P. Comunista. A continuación se procede a la votación de la proposición no de ley con la modificación derivada de la enmienda del G. P. Comunista. Fue aprobada.

Dictámenes de Comisiones:

Página

—**De la Comisión de Trabajo, sobre la proposición de ley básica de empleo (continuación):**

Artículo 5.º 6691

El señor Pérez Royo defiende un voto particular del G. P. Comunista, y el señor Almunia Amann defiende una enmienda del G. P. Socialista del Congreso. Turno en contra del señor Fernández Arias (G. P. Centrista). Para rectificar intervienen nuevamente estos tres señores Diputados. Fueron rechazados el voto particular y la enmienda, y aprobado el texto del dictamen.

Página

Artículo 6.º 6701

El señor Pérez Royo defiende una enmienda del G. P. Comunista, y el señor De Senillosa Cros otra del G. P. de Coalición Democrática. El señor Torres Izquierdo (Grupo Parlamentario Centrista) defiende el dictamen. Intervienen nuevamente, para rectificar, los señores Pérez Royo y Torres Izquierdo. Se admite a trámite la enmienda transaccional propuesta por el G. P. de Coalición Democrática. Fue rechazada una parte de la enmienda del G. P. Comunista y aprobada otra. También fue aprobada la enmienda transaccional del G. P. de Coalición Democrática. A continuación fue aprobado el texto del dictamen, quedando incorporados al mismo los contenidos en las enmiendas que han sido aprobadas anteriormente.

Página

Artículo 7.º 6705

Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
Votación de conjunto del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa	6705

El señor Presidente manifiesta que, de acuerdo con lo previsto, se va a proceder a la votación de conjunto del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa, a cuyo texto quedan incorporadas las enmiendas del Senado que han sido aceptadas. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 294; abstenciones, cinco. El señor Presidente declara definitivamente aprobada la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en la forma antes señalada.

Por el señor Secretario (Torres Boursault) se da lectura al programa y horario de trabajo de algunas Comisiones para mañana. El Pleno continuará mañana, a las once y media. Se levanta la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos el Pleno de esta semana con la previsión de agotar el orden del día establecido, y la habilitación, en consecuencia, de las mañanas para continuar la sesión plenaria.

El orden del día se desarrollará en los términos en que figura en el texto que ha sido impreso y remitido o facilitado a Sus Señorías, con las siguientes modificaciones: en primer lugar, lo que en el orden del día aparece como nota, que es la previsión de asuntos que podrían ser incluidos en el mismo si así lo acordaba la Junta de Portavoces, han quedado efectivamente incluidos por acuerdo de dicha Junta en la reunión celebrada esta mañana.

Consiguientemente, las enmiendas del Senado se tramitarán a continuación de las que ya figuraban como tales en el orden del día, y los dictámenes de Comisiones, a continuación de los que ya figuraban asimismo en dicho orden del día.

En segundo lugar se ha acordado una alteración en el orden del día en cuanto a dictá-

menes de Comisiones, colocando en primer término, en el apartado segundo, el dictamen de la Comisión de Trabajo sobre la proposición de ley básica de empleo. Por consiguiente, éste será el primer dictamen que será objeto de debate en el Pleno.

Finalmente se ha incluido en el orden del día (pese a su contenido fundamentalmente legislativo) una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la nueva acción terrorista coordinada y dirigida por ETA (político-militar) en Andalucía y el País Valenciano. Esta proposición no de ley será objeto de debate y tramitación en este Pleno esta tarde, a las cuatro y media; es decir, será el primer punto que verá el Pleno al reanudar la sesión después de la interrupción correspondiente a la hora del almuerzo.

En la ley sobre el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal se ha detectado un error, que arranca del dictamen de la Comisión, en su día, que se mantiene también en el dictamen del Pleno del Congreso, y en el Senado. Es un error que se deriva del hecho de que un determinado concepto presupuestario era el 125 en el momento en que se remitió el proyecto de ley, y es el 127 en el actual Presupuesto.

Por consiguiente —el Senado hará otro tanto de lo que estoy haciendo ahora, en este momento—, comunico a la Cámara la necesidad de proceder a la subsanación de ese error material, en el sentido de que debe figurar el concepto presupuestario número 127, en lugar del número 125, en el artículo 22, de la que ya es Ley de 24 de abril de 1980. De manera que, si no hay objeción por parte de ningún Grupo Parlamentario de la Cámara, se procederá a la subsanación del error en los términos señalados. (*Asentimiento.*) Queda así acordado.

ENMIENDAS DEL SENADO:

— AL PROYECTO DE LEY DE INSPECCION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social.

El Presidente va a ir haciendo la enunciación de los artículos afectados por las enmiendas y serán, como siempre, objeto de votación conjunta, salvo que se solicitara por algún Grupo Parlamentario la votación separada o la utilización de un turno a favor o en contra de la enmienda propuesta por el Senado.

Repito que vemos las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social. Enmiendas al artículo 1.º, al artículo 2.º, al artículo 4.º...

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, pedimos la votación separada de las enmiendas a los artículos 1.º y 2.º

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas propuestas por el Senado a los artículos 1.º y 2.º de este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto de los artículos 1.º y 2.º de este proyecto de ley.

Enmiendas del Senado al artículo 4.º; enmiendas del Senado al artículo 5.º; enmiendas al artículo 6.º...

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Nosotros quisiéramos que se votaran por separado los tres artículos, es decir, las enmiendas a los artículos 4.º, 5.º y 6.º

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Vamos a proceder a la votación en los términos solicitados por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

En primer lugar, enmiendas del Senado al artículo 4.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 151; en contra, 118; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 4.º

Votamos ahora las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 5.º, en su número 1. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, nueve; en contra, 164; abstenciones, 104.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 5.º, número 1.

Votamos seguidamente las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 6.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, ocho; en contra, 260; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 6.º

Enmiendas al artículo 10. (Pausa.) Enmiendas al artículo 11. (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: El 10 es 11, porque cambia la numeración; lo que era 11, ahora es 10.

El señor PRESIDENTE: En el artículo 10 ha habido una modificación y al número 2 del artículo 11 ha habido otra modificación propuesta por el Senado.

El señor FRAGA IRIBARNE: Me parece que figura como número 2 del 10. Para clarificar he de decir que quiero discutir el número 2 del 11 antiguo, que es el número 2 del 10 nuevo, en el texto impreso.

El señor PRESIDENTE: Ahora lo veremos. Tiene la palabra el señor Vida.

El señor VIDA SORIA: Señor Presidente, se trata sólo de advertir que en el artículo 11, 2, de la redacción del Senado, nosotros pensamos que puede haber una errata o, en cualquier caso, una deficiencia técnica. Dice el artículo, según queda después de la redac-

ción del Senado: «La expedición de las certificaciones de descubierto corresponden al órgano competente y deberán ser autorizadas por el Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social».

Técnicamente creemos que es una errata y que se trata de decir: «... por la Delegación territorial...», no por el Delegado, que, en definitiva, es una persona, sino por la Delegación.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay objeción sobre este tema que ha planteado el señor Vida Soria? (Pausa.)

En todo caso deberá quedar respaldado por el acuerdo del Senado que efectivamente subsane el error en los términos señalados, puesto que en estos momentos no tenemos facultad más que para pronunciarnos sobre la aceptación o no de las enmiendas propuestas por el Senado. En esos términos se votará, con ese valor entendido, con la corrección señalada por el señor Vida Soria.

Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, aclarado que, como digo, éste es el punto 11, 2, en el texto del Congreso y, aparentemente, 10, 2, en el del Senado, nuestro punto de vista es que debe rechazarse íntegra la enmienda del Senado, porque diga «delegación» o diga «delegado», era mejor el texto del Congreso, que decía: «Deberán ser autorizadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo», ya que el delegado es una sola persona y, evidentemente, esto plantea problemas enormes de rigidez; y, por otra parte, el texto anterior era bueno, puesto que aseguraba la competencia técnica en la decisión.

Nuestra propuesta, por tanto, es que, con una u otra redacción, se rechace la enmienda del Senado.

El señor PRESIDENTE: En todo caso, queda claro que se mantiene como número 2 del artículo 11. Hubo, por lo visto, un error en un determinado texto, que lo llevaba al 10, pero que está subsanado ya. De modo que tenemos, por un lado, la modificación del artículo 10 y, por otro, el número 2 del artículo 11. Entiendo, por las intervenciones

habidas, que se desea votar por separado las enmiendas a uno y otro.

Votamos, pues, en primer lugar, las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 10. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 172; en contra, seis; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 10.

Sometemos a votación seguidamente las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 11, número 2, con las observaciones hechas con anterioridad.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 274; en contra, siete; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 11.

¿Enmiendas al artículo 12? (Pausa.) ¿Enmiendas al artículo 13? (Pausa.) ¿Enmiendas al artículo 14? (Pausa.)

A petición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso separamos del resto estos tres artículos. Por consiguiente, sometemos a votación ahora las enmiendas a los artículos 12, 13 y 14.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 178; en contra, dos; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto de los artículos 12, 13 y 14 de este proyecto de ley.

Enmiendas al artículo 18. (Pausa.) Enmiendas a la Disposición transitoria tercera. (Pausa.) Sometemos unas y otras conjuntamente a votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 154; en contra, 121; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del artículo 18 y de la Disposición transitoria tercera de este proyecto de ley.

Queda con ello concluida la tramitación del proyecto de Ley de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social, que queda definitivamente aprobado en los términos que resultan de la incorporación de las enmiendas aceptadas en las votaciones anteriores al texto en su día aprobado por el Congreso de los Diputados.

— AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA VIVIENDA.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la vivienda.

Enmiendas del Senado al artículo 2.º (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Esperabé.

El señor ESPERABE DE ARTEAGA GONZALEZ: Señor Presidente, para solicitar la votación separada de las enmiendas a los artículos 2.º, 4.º y 7.º

El señor PRESIDENTE: ¿Separadas o juntas entre sí y por separado de las demás?

El señor ESPERABE DE ARTEAGA GONZALEZ: No hay inconveniente en que sea juntas entre sí.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al artículo 2.º (Pausa.) Enmiendas al artículo 4.º (Pausa.) Enmiendas al artículo 7.º (Pausa.)

A petición del Grupo Parlamentario Centrista, acotamos aquí el objeto de esta primera votación.

Enmiendas, pues, del Senado a los artículos 2.º, 4.º y 7.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, nueve; en contra, 270; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto de los artículos 2.º, 4.º y 7.º

Enmiendas al artículo 8.º (Pausa.) Enmiendas a la Disposición final. (Pausa.)

El señor Pérez Royo tiene la palabra.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, pedimos votación separada del párrafo segundo del número 2 de la Disposición final y, al mismo tiempo, un turno en contra del párrafo que se agrega.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas al artículo 8.º y el primer párrafo de la enmienda al número 2 de la Disposición final. Le sometemos a votación conjuntamente.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 274; en contra, ocho; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 8.º, así como las que figuran en el primero de los párrafos en que se articula la enmienda a la Disposición final.

Propone asimismo el Senado, respecto de esa Disposición final, la enmienda consistente en adicionar un segundo párrafo al número 2 de la misma Disposición.

Para consumir un turno en contra de esa enmienda tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Gracias, señor Presidente. Para un breve turno en contra que se centra en la exposición de un escrúpulo constitucional, que no sería de preocupar en sí si no fuera por la frecuencia con que es necesario plantear estos escrúpulos.

El presente se refiere en concreto a que, como Sus Señorías habrán observado, se contiene en esa enmienda del Senado una referencia a la incorporación de los preceptos de esta ley al texto refundido que regule el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Como Sus Señorías saben perfectamente, la técnica de los textos refundidos es una técnica de delegación legislativa para la cual nuestra Constitución establece requisitos y límites precisos que no aparecen observados en esta enmienda, en la que, por añadidura,

incluso parece que se plantea una especie de delegación implícita. Esa sencillamente es la razón por la cual nos oponemos a la inclusión: por respeto a la Constitución y porque entendemos, además, que es una técnica legislativa más correcta la que quedaría con la depuración de esta enmienda. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Para un turno a favor de la enmienda del Senado tiene la palabra el señor Rodríguez-Miranda.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Señor Presidente, señores Diputados, simplemente para aclarar que la modificación del párrafo segundo del número 2 de la Disposición final no establece una autorización para una refundición de ningún texto, sino simplemente para la inclusión en el vigente texto refundido de los artículos que hoy se aprueban con la misma redacción que hoy se otorga. Por lo tanto, no hay ninguna refundición ni coordinación de textos propuesta, sino simple inclusión de los artículos que hoy afectan al Impuesto de Transmisiones, dentro del texto legal —repito— que regula dicho Impuesto. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Para un turno de rectificación tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Yo siento rectificar al señor Rodríguez-Miranda, indicándole que, en cualquier caso, aquí estamos en una técnica que autoriza una refundición. Que sea para hacer un texto refundido global o para hacer una modificación parcial o texto refundido, estamos ante una técnica de refundición de delegación legislativa en la cual, insisto, hay una absoluta inobservancia de las limitaciones que el artículo 82 de la Constitución prevé para estos supuestos.

Insisto en nuestra oposición a la enmienda del Senado y en pedir el voto negativo para la modificación.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del párrafo segundo de la enmienda del Senado al número 2 de la Disposición final.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 146; en contra, 23; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Senado consistente en la incorporación de un nuevo párrafo al número 2 de la Disposición final.

Pasamos a votar la enmienda del Senado por la que se propone la incorporación de una Disposición adicional nueva.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 278; en contra, tres; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Senado consistente en la incorporación de una nueva Disposición adicional.

Con esto queda concluida la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la vivienda y definitivamente aprobado el texto resultante de incorporar las enmiendas del Senado, aceptadas según las votaciones anteriores, al texto inicialmente aprobado por este Congreso de los Diputados.

— AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LIBERTAD RELIGIOSA.

El señor PRESIDENTE: A continuación entramos en las enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Enmiendas al artículo 5.º (Pausa.) Enmienda a la Disposición transitoria segunda. (Pausa.) Enmienda consistente en el cambio de sistemática en orden a la ubicación de la Disposición final, la Disposición derogatoria y las Disposiciones transitorias. (Pausa.—El señor Solé Tura pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Solé.

El señor SOLE TURA: Nosotros tenemos una objeción al cambio que se solicita de la Disposición transitoria primera, que, si yo entiendo bien, significa incluirla dentro del texto. Si se trata de eso, estaríamos en contra;

si sólo se trata de orden, pero manteniéndola como Disposición transitoria, entonces no tendríamos objeción. Pero tal como está aquí lo que se dice es: «Disposición transitoria primera: se incluye después del artículo 8.º». Esto es lo que se dice.

El señor PRESIDENTE: Va después del artículo 8.º en el sentido de que queda como la primera de las Disposiciones que se incorporan al final.

El señor SOLE TURA: ¿Pero queda como Disposición transitoria?

El señor PRESIDENTE: La Presidencia entiende que aquí lo único que hay es un cambio de ordenación entre las Disposiciones que van a continuación de la parte articulada. De manera que así como en el texto del Congreso va en primer lugar la Disposición final, después la derogatoria y después las transitorias, lo que propone el Senado es que vayan primero las transitorias, después la derogatoria y luego la final. Creo que éste es el cambio de sistemática propuesto por el Senado.

Sometemos a votación, pues, la totalidad de las enmiendas propuestas por el Senado a este proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 274; en contra, uno; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

La votación de totalidad requerida por el artículo 81 de la Constitución tendrá lugar esta tarde sobre las siete horas, antes de levantar la sesión, porque la previsión es levantar la sesión esta tarde entre siete y siete y cuarto. Lo advierto a Sus Señorías, antes de levantar la sesión someteremos a votación de conjunto la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, a efectos de incorporar las enmiendas que, por mayoría simple o en votación ordinaria, han sido ya incorporadas al texto.

— AL PROYECTO DE LEY DE BASES SOBRE PROCEDIMIENTO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, que se refieren al artículo 2.º de este proyecto de ley.

Vamos a proceder a votarlas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 283; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por el Senado respecto del proyecto de Ley de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, proyecto que queda definitivamente aprobado con el texto resultante de incorporar las enmiendas aprobadas al texto originariamente aprobado por este Congreso de los Diputados.

DICTAMENES DE COMISIONES:

— DE LA COMISION DE TRABAJO, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY BASICA DE EMPLEO.

El señor PRESIDENTE: Al dictamen de esta proposición de ley ha mantenido una enmienda de totalidad el Grupo Parlamentario Andalucista, que, sin embargo, no fue admitida a trámite en Comisión ni sometida a votación, por lo cual me indican que no resulta procedente su tramitación ante el Pleno.

Se trata de una enmienda en que hay una singularidad de tramitación, señor Aguilar. Es una proposición de ley, proposición de ley que es objeto de un debate de totalidad en Comisión, que da lugar a un cambio de texto en el que las enmiendas a la totalidad ya no procedían conforme a las normas aplicables y conforme a las normas en general, porque una proposición de ley, una vez tomada en consideración por el Pleno de la Cámara, no es susceptible de enmienda de totalidad de devolución, sino únicamente de enmienda de totalidad con propuesta de tex-

to alternativo, puesto que ha habido ya un trámite en el que el Pleno ha tomado en consideración el tema.

El señor Aguilar tiene la palabra.

El señor AGUILAR MORENO: Sí, señor Presidente, con su venia. Existe un precedente, que es precisamente la tramitación de la enmienda número 34, del Grupo Centrista, a la proposición de ley, cuya aceptación se produjo después de haberse publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes» el plazo para enmiendas exclusivamente al articulado.

Así, pues, precisamente lo que nos sirve de fundamento para la pretensión de que se debata como enmienda de totalidad es ese precedente, puesto que, no sé si ingenuamente, pensamos que todos los Grupos Parlamentarios ostentan los mismos derechos.

Quiero salir al paso de la posible objeción de que esto pudiera producir una serie de enmiendas a la totalidad sucesivas, porque no es así desde el momento en que la enmienda presentada por el Grupo Andalucista es exclusivamente de devolución y no alternativa, que sería la única posibilidad de que se volviera a producir esa situación.

En este sentido solicitamos de la Presidencia, y de la Cámara en su caso, que se admita a trámite la enmienda de totalidad en este Pleno para debatirla a continuación.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señor Aguilar. Entiende la Presidencia que lo que no cabe es enmienda de devolución. Lo que ocurre es que, tal como tiene articulada el Grupo Parlamentario Centrista su posición en este punto, no es tanto de devolución, porque era inicialmente una posición de inadmisión de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Centrista —eso es por lo menos lo que dice literalmente el escrito presentado—, por lo cual entiendo que lo que pretende el Grupo Andalucista es sostener el texto inicial de la proposición. ¿Es así?

El señor AGUILAR MORENO: Sí, señor Presidente, pero es una cosa inalterable. Una vez que se ha soslayado esa proposición de ley mediante una alternativa, ésta hace las veces prácticamente de un proyecto.

El señor PRESIDENTE: Es que no es proyecto de ley. El proyecto de ley permite una enmienda de devolución, porque hay incluso un sujeto al que se devuelve. Una proposición de ley no permite una enmienda de devolución, porque no hay a quién se devuelve. ¿A quién se devuelve? ¿Al Pleno de la Cámara, que ya ha acordado tomarla en consideración?

Sin embargo, entiende la Presidencia que la enmienda presentada por el Grupo Andalucista, en cuanto que es una enmienda de oposición al texto alternativo, es una enmienda que puede entenderse de sostenimiento del texto originario.

El señor AGUILAR MORENO: Esa es exactamente la intención de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: En esos términos entiende la Presidencia que, efectivamente, puede ser tramitada.

Tiene la palabra el señor Aguilar, para defensa de la enmienda que es de oposición al texto alternativo; no para que deje de tramitarse la proposición de ley.

El señor AGUILAR MORENO: Muchas gracias, señor Presidente. En ese caso iniciamos la defensa de la enmienda a la totalidad, reduciendo nuestra intervención al máximo, dada la congestión que, podemos decir, padece este Pleno en cuanto a su temática. Aun cuando se trata, como ha precisado la Presidencia, de retornar a la proposición de ley inicial, por supuesto, hemos de argumentar también nuestra postura en el rechazo de esa enmienda de totalidad que ha sido admitida y que es la que, en definitiva, se quiere traer a esta Cámara.

Los argumentos que usamos a favor de esta enmienda son argumentos a favor de la discusión y del retorno a la proposición de ley del Grupo Socialista, que sirvió de base a toda esta tramitación y que, quiero recordar, es de la anterior legislatura.

La enmienda del Grupo Centrista, a nuestro entender, es inadmisibles, porque como punto fundamental reduce de una forma drástica y gravísima para la clase trabajadora las prestaciones que todavía actualmente vienen percibiendo en la situación de desempleo.

Además se pretende hacer, podemos decir, la hipócrita función de subvencionar una serie de obras públicas y de interés social no con fondos presupuestarios del Estado, sino con los que se les quitan a los trabajadores de los que actualmente es su seguro de desempleo; y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, como hemos venido reiterando ya desde la discusión del Estatuto del Trabajador, y hoy volvemos a retornar, en el sentido de nuestra más fuerte oposición a esta enmienda y a los principios que, al parecer, la inspiran, porque una vez más los regímenes especiales, fundamentalmente al sector agrario, quedan marginados de la protección del desempleo, y se vuelven a retirar o a remitir a un momento impreciso y sin ninguna garantía de que se produzca la tan deseada equiparación entre todos los trabajadores, sin distinción de la rama o del sector en que vengan actuando.

Una vez más es rechazado aquí esto. Se rechazó, como digo, en el Estatuto del Trabajador y se nos dijo, como respuesta a nuestra pretensión de que entonces se tomara en consideración el trabajo agrícola, al igual que el trabajo industrial, que era un tema sectorial y que en su momento se plantearía. Aquí estamos en el momento más importante para tratar el tema del desempleo en relación con el trabajo agrícola, y una vez más es rechazada la igualización del trabajador agrícola con el trabajador industrial, así como con otros sectores que actualmente tienen regímenes especiales y que, según esta enmienda, se mantienen en esa misma situación de discriminación. Concretamente, en cuanto al trabajo agrícola, al no admitirse su igualación con otros trabajadores, se pretende mantener esa limosna que se llama empleo comunitario y que, por tanto, como tal limosna, no sirve más que para perpetuar al que la da y al que la percibe en la misma situación de discriminación.

Hablar, en una llamada ley básica de empleo, de la solución del problema del paro o de la amortiguación de este problema sin ninguna medida que haga referencia a la financiación que puede suponer ese subsidio de paro o ese seguro de desempleo sin discriminación en cuanto a la clase de trabajadores, entendemos, Señorías, que es la demos-

tración de que esta ley, en el fondo, sólo son palabras que no pretenden solucionar el problema, sino que solamente pretenden reducir los costes de la Seguridad Social, por supuesto, a costa de los trabajadores, que van a ver mermados sus ingresos en la situación de desempleo, incluso en los casos previstos en esta ley, que no son más que un sector de los trabajadores y no el más afectado, como he dicho, el del sector primario. Hablar de una ley básica de empleo sin considerar una financiación, tanto en obras públicas como en fomento de inversiones privadas, que puedan propiciar subsumir el paro en un trabajo realmente productivo es, como he dicho, una mera palabrería.

Estos son los motivos que nos hacen no admitir esta enmienda del Grupo Centrista, cuyo rechazo diera lugar a la tramitación de la proposición inicial, proveniente de la anterior legislatura, pero revitalizada en ésta, puesto que partía de principios más justos, más sociales y más acordes con nuestro pensamiento. En ese sentido solicitamos de la Cámara que se vote la enmienda de totalidad con el carácter que le ha dado la Presidencia y que le quiero dar también en esta intervención.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra de esta enmienda. *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo en Comisión postuló la no admisión de la enmienda que acaba de ser defendida. Pese a ello razonó fundamentalmente a la vista del escrito de la Presidencia del Congreso de los Diputados, que, a consulta de la Mesa y de la Comisión de Trabajo, nos transmitía el documento al que a continuación voy a dar lectura:

«En contestación a la consulta elevada referente a la tramitación de la enmienda 34, del Grupo Centrista» (y quiero recordar en este momento que la enmienda 34, que postuló en su día nuestro Grupo, no tiene nada que ver en cuanto al tiempo con la enmienda número 107 que acaba de ser defendida, porque fue enmienda a la proposición en el tiempo hábil en que todos los Grupos enmen-

daron a la proposición, no como la 107, que fue enmienda en su día cuando se reabrió un período de enmiendas, concretamente a la enmienda de totalidad que había sido aprobada en Comisión), «a la proposición de ley de protección contra el paro, de la que es autor el Grupo Socialista, la Presidencia del Congreso resolvió lo siguiente: primero, la citada enmienda del Grupo Centrista debe ser considerada como enmienda a la totalidad, que propugna una nueva redacción del texto, de acuerdo con principios distintos, según se desprende del análisis de la misma. Segundo, la enmienda de referencia tiene su encaje reglamentario en el artículo 94, 2, «in fine», y en el artículo 96, 4, ambos del vigente Reglamento provisional de este Congreso. Tercero, de acuerdo con lo previsto en el último precepto citado, el debate en Comisión debe comenzar por la referida enmienda; si prosperase ésta» —como sucedió— «con objeto de que todas las enmiendas presentadas puedan convertirse a la numeración de artículos que la enmienda 34 propone y de que los parlamentarios puedan presentar otras nuevas a dicho texto, se abrirá un plazo de quince días hábiles en el que los señores Diputados y Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al articulado» —exactamente lo releo: enmiendas al articulado—. «Si, por el contrario, la citada enmienda 34 fuera rechazada, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 96, 5, y siguientes».

Este documento, esgrimido por nuestro Grupo y conocido, como es lógico, por la Mesa y la Comisión, sirvió no para que no hubiera debate en Comisión, pero sí cuando menos para que no hubiera votación sobre si procedía o no la enmienda. En todo caso, yo quiero decir al señor parlamentario del Grupo Andalucista que antes intervino que no es exacto en absoluto que en el texto de su enmienda 107 pidiera este Grupo la reposición del texto del Grupo Socialista denominado «proposición de ley de medidas contra el paro».

Exactamente quiero leer sólo dos o tres párrafos de la enmienda 107, del Grupo Andalucista. Dice el Grupo Andalucista en su enmienda que la del Grupo Centrista «debe ser rechazada al no aportar ninguna variación sustancial a la proposición de ley» socialista.

Que «no se puede calificar como política de fomento del empleo lo que puede incurrir en el mismo defecto que pretende rectificar la enmienda de totalidad». Quiere ello decir que considera tan defectuosa la proposición socialista como la del Grupo Centrista.

En su último párrafo dice esta enmienda: «En efecto, esta enmienda tampoco» (resalto la palabra «tampoco») «es una verdadera política global de empleo, pues no contempla ni se compromete a imprescindibles inversiones públicas ni incluye medidas de fomento de la privada. Sin estas condiciones se trata tan sólo de medidas parciales, pero que nunca podrían significar un enfrentamiento global con situaciones endémicas de paro, especialmente en el sector primario».

Fundamentalmente yo quería limitar esta primera intervención a estas razones de tipo procesal que nos hicieron pedir en Comisión, como hoy pedimos en el Pleno, la no votación, por inadmisibile, de la enmienda defendida. En todo caso, acataremos la decisión de la Mesa y de la Presidencia; pero en el caso de que se someta a votación, nuestro Grupo votará y pedirá a los restantes Grupos el voto en contra de la enmienda defendida.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si clarificamos el tema reglamentario en cuanto a la tramitación de la llamada enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Andalucista.

Una proposición de ley tomada en consideración por el Pleno de la Cámara, no susceptible de enmiendas a la totalidad de devolución; es, sin embargo, susceptible de enmiendas a la totalidad de texto alternativo.

Presentada una enmienda a la totalidad de texto alternativo, se produce el trámite correspondiente, el debate en el seno de la Comisión, y el resultado de ese debate es un pronunciamiento de la Comisión que define el texto que sirve de base para la tramitación según los términos estrictamente reglamentarios.

Acordada por la Comisión la adopción de un determinado texto, bien sea rechazando o aceptando el texto alternativo, en el seno de la Comisión el tema de totalidad queda cerrado. Por consiguiente, hizo muy bien la Comisión al no aceptar a trámite y nueva

votación una enmienda a la totalidad, porque la Comisión ya se había pronunciado en cuanto a la totalidad. Ello no obstante, el tema de totalidad es susceptible de traerse al Pleno, porque si no queda definitivamente cerrado por acuerdo de la Comisión cuál es el texto base que sirve para la tramitación.

Por consiguiente, hizo bien la Comisión en no admitir a votación la enmienda del Grupo Andalucista, y ha hecho bien la Presidencia en admitirla a votación en el Pleno, porque es una instancia superior la del Pleno, que puede, efectivamente, pronunciarse sobre algo que ya se pronunció la Comisión; sobre si el texto base es el de la proposición de ley originaria o el del texto alternativo del Grupo Parlamentario Centrista.

Dicho esto hay, efectivamente, problemas de calificación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Andalucista, porque no la ha instrumentado con rigor en los términos que está señalando la Presidencia. Pero por encima de las calificaciones formales, lo importante es la calificación material, atendida la naturaleza de las cosas, y esté instrumentada como esté instrumentada, lo cierto es que la posición del Grupo Centrista supone, de hecho, el mantenimiento de un voto particular en contra de un pronunciamiento que adoptó la Comisión, y eso puede ser objeto de debate y de votación subsiguiente en el Pleno de la Cámara.

Por consiguiente, estamos debatiendo esa posición que sería, en puridad, un voto particular en contra del pronunciamiento de la Comisión. Se ha consumido un primer turno a favor por el Grupo Parlamentario Andalucista, un primer turno en contra por el Grupo Parlamentario Centrista. Pregunto si algún otro Grupo desea intervenir en el debate, y ruego que las intervenciones se refieran ya al fondo de la cuestión, y que no siga siendo objeto de debate un tema reglamentario que ha quedado resuelto por la Presidencia.

¿Desea algún Grupo Parlamentario intervenir? (Pausa.)

Si me permite el señor Camacho, voy a preguntar antes qué Grupos Parlamentarios desean intervenir, con objeto de ordenar las intervenciones de los grupos. ¿Qué Grupos Parlamentarios desean intervenir en el debate de totalidad? (Pausa.)

El Grupo Parlamentario Comunista ha pedido la palabra. ¿Algún Grupo más? (Pausa.)

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Comunista, el señor Camacho y ha pedido también la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor CAMACHO ABAD: Era más bien para una cuestión de orden, porque en esta dirección, en la dirección de lo que se ha calificado finalmente de voto particular y en relación con el voto que vamos a realizar al número 2 del artículo 1.º, nosotros, si la Presidencia está de acuerdo, reservaríamos el tiempo para uno u otro, preferiblemente para el número 2 del artículo 1.º Esto es todo.

El señor PRESIDENTE: Tendrá en su momento, señor Camacho, un turno para la defensa de su enmienda.

El señor CAMACHO ABAD: Yo me refería a efectos del tiempo.

El señor PRESIDENTE: Quince minutos es mucho, señor Camacho.

El señor CAMACHO ABAD: De acuerdo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso no tenía pensada la posibilidad de intervenir en un turno a la totalidad de la proposición de ley que hoy se trae a esta Cámara; pero aprovechamos la oportunidad que da la decisión de la Presidencia para fijar la posición de nuestro Grupo sobre la enmienda a la totalidad, o el voto particular, presentado por el Grupo Andalucista en relación a la proposición de Ley Básica de Empleo remitida por el Gobierno.

Como saben Sus Señorías, la proposición de Ley Básica de Empleo, del Gobierno o del Grupo Parlamentario Centrista, fue una enmienda a la totalidad a una proposición de ley socialista de protección contra el paro. Hubo, en el año 1978, en la anterior Legisla-

tura, un debate sobre nuestra proposición de ley en este Pleno, debate del cual salió la toma en consideración de nuestra proposición de ley por una mayoría de votos de esta Cámara. Creemos que aquélla fue una decisión acertada de esta Cámara; en aquel entonces dijimos que nos había sorprendido, incluso, cuál había sido el sentido de la mayoría de los votos pero, evidentemente, nos felicitamos de ello, como nos felicitaremos hoy si esta enmienda a la totalidad, o este voto particular, sale adelante.

¿Por qué? Porque una simple lectura comparativa de cuál era nuestro texto inicial de proposición de ley con el que nos ha presentado el Gobierno, incluso después de los resultados del debate en Ponencia y en Comisión en el cual el texto ha sufrido algunas mejoras de tipo técnico, fundamentalmente, es suficientemente explícito para que la Cámara y la opinión pública juzguen cuál de los dos textos, el Socialista o el Centrista, es el más adecuado para una situación de paro, para una situación de falta de puestos de trabajo y para una situación en la cual, el Gobierno y su Grupo Parlamentario, quieren reducir la protección del trabajador en paro sin dar a cambio —por la definición de proyectos concretos o, incluso, por la experiencia de su gestión como Gobierno y como mayoría o minoría mayoritaria de este Pleno—, soluciones para ir reduciendo claramente esa situación de desempleo e ir abriendo perspectivas, incluso en una situación de crisis, para ofrecer salidas concretas a los parados de este país, tanto a los jóvenes como a los que ya han tenido un puesto de trabajo y lo han perdido.

En definitiva, el proyecto del Gobierno o la proposición de ley del Grupo Parlamentario Centrista lo que nos propone es reducir los fondos públicos que se destinan a la protección del trabajador en paro y, a cambio, anunciar una bella declaración de intenciones sobre medidas de fomento del empleo, con lo cual el Gobierno se queda con las manos absolutamente libres y hurta a este Parlamento la discusión en profundidad de esas medidas de fomento del empleo y de fondos públicos que deben afectarse para financiar dichas medidas, con lo cual si el proyecto del Gobierno o del Grupo Parlamentario Centrista

llega a entrar en vigor, llega a ser aprobado en esta Cámara y en el Senado, lo que nos vamos a encontrar es que no ha solucionado ni un ápice el problema del desempleo, que el número de parados sigue y seguirá creciendo al ritmo que lo está haciendo hoy, entre 1.000 y 1.500 parados diarios y, a la vez, que esos nuevos parados, sean jóvenes, sean mayores, sean mujeres u hombres, no tendrán el nivel de protección que tienen hoy, que no es desde luego satisfactorio, pero que por lo menos es cualitativamente mejor que el que nos propone la proposición de ley centrista.

No podemos compartir desde una perspectiva de izquierdas, desde una perspectiva socialista, la filosofía del Gobierno de intentar, en una situación de crisis, de desprotección y de falta de salidas, una política económica que hace pocos días ha quedado claramente denunciada aquí por el representante de nuestro Grupo, don Felipe González; no podemos aceptar que ante esa falta de política económica, de perspectivas, y ante ese hundimiento cada vez más en una situación de miseria y de paro, se les venga ahora a ofrecer a esos trabajadores, a esos sectores desprotegidos de la sociedad, una reducción de los fondos que esta sociedad está dispuesta a dar para protegerles en tanto no es capaz de ofrecerles puestos de trabajo. *(El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia)*

Por estas y otras muchas razones concretas, que irán saliendo a lo largo del debate de esta proposición de ley, el Grupo Socialista anuncia su voto favorable al voto particular o a la enmienda a la totalidad que propone el Grupo Parlamentario Andalucista y estaría muy dispuesto a que esta Cámara discutiese, sobre la base de la proposición de ley socialista original que, desde luego, no es una solución global al problema del paro, no es una formulación global de una política de empleo, pero sí es una formulación que entendemos justa para solucionar uno de los problemas más graves que tiene hoy el trabajador en paro, que es su desprotección. Habrá que hablar aquí no sólo de las medidas que se instrumenten para asegurar esa menor desprotección o mayor protección, habrá que hablar de cómo ha influido y de qué sacrificios y esfuerzos está dispuesta a hacer la sociedad para proteger a ese sector desprotegido. No

nos da miedo a los socialistas. A lo mejor se lo da a otros Grupos que prefieren destinar fondos públicos, miles de millones de fondos públicos, a otras actividades no prioritarias, a otras actividades minoritarias de esta sociedad.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad número 107 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 134; en contra, 157; abstenciones, tres; nulos, uno.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Queda rechazada la enmienda número 107 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Artículo 1.º Al artículo 1.º, título preliminar, capítulo único, no hay mantenidas enmiendas, por lo que vamos a proceder a su votación. (El señor Camacho Abad pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Camacho Abad.

El señor Camacho ABAD: Señor Presidente, nosotros propondríamos que se hiciera votación separada de los números 1 y 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): De acuerdo. Vamos a proceder a la votación en dos partes. Primero, el número 1 del artículo 1.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 289; en contra, tres; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Queda aprobado el número 1 del artículo 1.º

A continuación procedemos a votar el número 2 de dicho artículo 1.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 162; en contra, 24; abstenciones, 107.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Queda aprobado el número 2 del artículo

1.º, y con él la totalidad de dicho artículo.

Para explicación de voto tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO ABAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Comunista ya indicó anteriormente que, de alguna manera, haría la explicación de voto más amplia en este apartado, pero votaría «sí» a esta especie de voto particular/enmienda a la totalidad. Nosotros hemos votado «sí», como decía, a aquello, y hemos votado igualmente «sí» al número 1 del artículo 1.º; pero hemos votado «no» al número 2. ¿Por qué?

Nosotros partimos de que no se trata de negar al Gobierno que las leyes que hace trate de aplicarlas consecuentemente en un marco determinado, en el marco de su política económica. Creemos que está en su derecho; pero, entonces, ¿por qué hemos votado «no»? En primer lugar, porque dice este número 2 que las medidas de empleo se sitúan en el cuadro de la política económica del Gobierno. Bien, la política económica del Gobierno no responde precisamente a la creación de empleo, no responde a los intereses de los trabajadores ni a los de la sociedad española en general; responde a los intereses de un puñado de grandes capitales nacionales y extranjeros.

La política económica del Gobierno comenzó con el incumplimiento de los aspectos sociales de los Acuerdos de la Moncloa, sigue con el programa económico que reduce la parte de los salarios en la renta nacional para aumentar los excedentes del gran capital y continúa con el Estatuto del Trabajador que facilita, aún más, los despidos, abaratándolos.

A los que la crisis y esa política económica, esas leyes, expulsaron del trabajo, el proyecto de ley que discutimos les condena a pasar más hambre al reducirles el tiempo y la cantidad de prestación, porque disminuye, en resumen, en vez de aumentarla, la solidaridad con las víctimas de esa política económica y de esa crisis.

El cuadro de esa política económica, de una política económica cualquiera, debería plantear naturalmente el problema de que el objetivo de toda política económica debe ser asegurar, por el trabajo, la alimentación, el vestido, la educación y la salud de los ciu-

dadanos y ciudadanas de un país. Pues bien, en nuestro país, en 1979, aplicando esa política económica, los parados aumentaron en 250.000. El Instituto Nacional de Estadística acaba de cifrar, no hace muchos días, el aumento de los sin empleo, en lo que va de año, en 1.500 diarios, y la totalidad en 1.470.900. Hay que decir, en este sentido, que si el paro sigue incrementándose al ritmo de los tres primeros meses, a finales de 1980 tendremos 1.971.000, según los cálculos que hacen los especialistas del tema.

Hay que señalar que ya en nuestro país esa política económica, esa política de empleo, hace que en algunos lugares se pase hambre. Recientemente me decía un trabajador, Rafael Olvera, en Algodonales, un pueblo de la provincia de Cádiz: he trabajado con el empleo comunitario ocho días en el mes y tengo ocho hijos. Que nos digan cómo se puede dar de comer, cómo se puede no pasar hambre en esas circunstancias.

En los primeros cuatro meses de 1980, los expedientes de regulación de empleo —decía el señor Sánchez Terán, creo que en «ABC» del día 8 de junio— fueron 5.767, y todos sabemos que eso significa un aumento de un 92 por ciento en relación con los de los mismos meses del año anterior. Y ya sabemos que los expedientes de regulación de empleo comienzan, de alguna manera, por reducir la jornada o cargar al Fondo de Regularización una parte del empleo, pero terminan más tarde inexorablemente por los despidos.

Hay que señalar que se habla de esos 2.998 nuevos empleos en el mes de mayo, haciendo creer que se ha invertido la tendencia, cuando en realidad es que estamos en el mes en el que comienza con cierta amplitud el turismo y el trabajo agrícola. Esto nos indica que la mala conciencia de esta política económica conduce a justificarse unos días antes de discutir en el Parlamento la Ley de Empleo.

Hay que señalar en este sentido que no para todo el mundo esta política económica es mala. Podríamos hablar de esos 115.000 millones de beneficio que se han repartido la Banca y las Cajas de Ahorro. Está claro que, en este sentido, el cuadro de esta política económica de la que se habla en el número 2 significa, para una importante parte del país,

más paro, más hambre y más crisis, y para un puñado reducido beneficios fabulosos, mayores que los de otros años.

Podríamos decir que esta Ley Básica de Empleo es, más que una ley de empleo, la ley de la insolidaridad con los que la crisis y esa política han conducido al paro, y también la ley del desempleo. Está claro que esta ley es coherente con esa política de sumisión al gran capital y de dimisión ante los grandes problemas nacionales que practica el Gobierno de alguna manera. El Gobierno, a través de esta ley, no nos presenta ninguna política de empleo. Podríamos decir más: el Gobierno renuncia, precisamente en el cuadro de la ley, a esa política de empleo.

Hay que señalar que se reducen en cerca de 100.000 millones los afectados al seguro de desempleo, aunque se cree la figura del subsidio. Hay que decir que se suprimen, o se pretenden suprimir, según los últimos planes que se hacen, esos recursos y el déficit que había; es decir, se trata de suprimir 60.000 millones de déficits previstos, y reduce la aportación del Estado en 40.000 millones. Ese es uno de los objetivos de esta ley: repartir malamente lo poco que queda después de disminuir esas escasas cantidades, que en el Presupuesto actual se sitúan en torno a los 198.703.284.000 pesetas, de las que hay que reducir todavía los gastos de estos mecanismos de la Seguridad Social.

Hay que señalar que esto se hace precisamente cuando en el país hay más parados; cuando en el país, además de más parados, hay cada vez menos trabajo. Es el momento que se elige para de alguna manera comprometer menos fondos.

Resumiendo, nuestra posición con respecto a este artículo, y en general frente a la ley, es que pedimos en su momento que se hiciera otro tipo de ley, que se devolviera esta ley para hacer una ley de acuerdo con las Centrales Sindicales, de acuerdo con las fuerzas de todo el país en los distintos órdenes.

Hemos votado no porque el cuadro de la política económica, de unos salarios en pérdida de capacidad adquisitiva y de unos trabajadores en pérdida de empleo, transfiere recursos al gran capital, que éste no utiliza para nuevas inversiones, como hemos visto con el aumento precisamente de la parte del gran capital, en esos excedentes que en años

anteriores, los últimos fundamentalmente, aumentaron. Porque, además, la Ley de Empleo, a los que la anterior legislación y la crisis dejaron sin trabajo, les reduce a la mitad —y eso lo veremos en la continuación de la discusión— el seguro de paro.

Esta ley, que debió retirarse, es en cierta medida inhumana, porque condena a muchos trabajadores, a muchas familias de nuestro país, a pasar hambre: a unos porque no les crea empleo ni les da subsidio y a otros porque se lo reduce a la mitad; es antiobrera, porque se hace frente a las Centrales Sindicales y frente a los deseos de los trabajadores, y es antidemocrática, porque va a ser una minoría parlamentaria —la mayor si se quiere— la que va a imponer, contra todos, esta política al país. Es por ello una ley que no responde a los intereses nacionales.

Por eso, el Grupo Parlamentario Comunista está en contra en lo fundamental. Y si es verdad que se han modificado algunas cuestiones en el curso de la discusión en la Comisión, fundamentalmente con la presión de nuestro Grupo y de los compañeros socialistas y de otros Grupos progresistas de la Cámara, no es menos cierto que la ley sigue siendo profundamente negativa.

Nosotros somos conscientes de que, si no nos opusiéramos a esta política antiobrera, cuando se apague el eco de esta ley presentaríais otra, que ya se anuncia por la CEOE, por la gran patronal: con el pretexto de regular de alguna manera las huelgas, declararíais ilegales a la mayor parte de las huelgas y desarrollaríais la represión que está comenzando ya en algunas empresas.

Creemos, como se decía aquí muy especialmente por los portavoces de los Grupos Parlamentarios, en primer lugar el Comunista y el Socialista en el gran debate, que hay que decir al país la verdad. Vivimos una situación de emergencia, el modelo económico, irracional y escasamente nacional que dirige la economía de nuestro país, nos ha colocado ante esas posibilidades de tener tres millones de parados en un plazo relativamente breve, tal vez para 1983. Y hay que decirle al país la verdad como en aquellas frases de Churchill que aquí se citaron; sí, hay que decirle que el paro y la crisis hoy ya son hambre y lágrimas, son emergencia en el país, y se ne-

cesita, como decía Santiago Carrillo en su intervención, una política de solidaridad, que es la única que puede hacer frente a ese problema.

Está claro que nosotros somos conscientes que tres millones de parados —que podremos tener, que tendremos tal vez si no cambia la política económica del país— constituyen un verdadero desastre nacional, y los podríamos tener ya para el año 1983.

Está claro también que los comunistas no nos limitamos a criticar, no somos demagogos en este sentido, y no cabe la menor duda que nosotros hemos presentado una alternativa, la presentamos ya: retirar este proyecto y hacer una ley basada en un acuerdo que tuviera como cimientos la solidaridad; la solidaridad de clase, la solidaridad nacional, la solidaridad de todas las regiones, de las nacionalidades de nuestro país, la solidaridad del trabajador de la ciudad con el del campo, del que tiene dos empleos para que deje uno en favor del que no tiene ninguno, del que hace horas extraordinarias para que deje de hacerlas en favor del que no tiene empleo; un plan de obras de equipamiento, de obras públicas de riego, de reformas del campo. También el Plan Energético Nacional, las obras de la Rente, la construcción.

Nosotros estimamos que todos estos planteamientos serían la solución en este cuadro de emergencia del que hablamos. Somos conscientes de que la situación es extremadamente delicada y puede hacerse mucho más grave todavía. Pero hay una salida, habría que decirselo a los trabajadores y al país, y esa salida se sitúa en el cuadro de esas medidas.

Queremos señalar que estamos en condiciones, con el apoyo del resto de las fuerzas de tipo progresivo de nuestro país, de tipo nacional —a su cabeza naturalmente la clase obrera—, estamos en condiciones, repito, de decir a los trabajadores eso que planteábamos: nada de pluriempleo, nada de horas extraordinarias. Estamos dispuestos también, en el cuadro de ese mismo plan, de esa solidaridad de clase y nacional, a desarrollar la productividad, a reducir el absentismo, siempre que los recursos generados vayan a los fines citados y no a crear más paro; siempre que sirvan a una sociedad más solidaria, más

humana, que la que en este momento tenemos y la que se pretende instalar con esta ley.

Un Fondo nacional de solidaridad contra el paro y contra la crisis hecho con aportaciones de todos en diferentes formas, como salario diferido en unos casos, como beneficios no entregados o como excedentes dedicados al Fondo nacional para la inversión. Estamos dispuestos, repito, a pedir a los trabajadores, al mismo tiempo que a toda la sociedad, a que participen directamente en el esfuerzo y en los resultados si los empresarios, si todas las fuerzas lo hacen también, sobre la base, naturalmente, de que los sacrificios mayores los haga el que más tiene, sobre la base de que pague más el que tiene más. Sería una especie de salarios y beneficios diferidos, una aportación nacional que se destinaría a la creación y gestión por todos de un Fondo de solidaridad nacional contra el paro y la crisis —también en beneficio de la pequeña y mediana empresa—, en el que participarían igualmente las Comunidades Autónomas y el Estado.

No podemos hacer lo que dice la CEOE en el comunicado que está empezando a circular por ahí, o lo que hace naturalmente el Gobierno. No podemos instalarnos en la crisis ni justificarnos con que hay limitación de recursos. De acuerdo, no hay recursos, pero creémoslos, sobre la base de ese esfuerzo nacional de solidaridad, sobre la base de la participación de todas las clases, ya que ninguna parte de la sociedad está en condiciones por sí sola de hacer ese esfuerzo diríamos de una manera efectiva.

Creemos que hay recursos para salir del paro y de la crisis, recursos que exigirán esfuerzos, que exigirán naturalmente sacrificios. Estamos dispuestos a realizarlos si hay esos cambios, si hay también un modelo económico nacional, si hay ese nuevo orden del que se habla en la ONU, del que se habló en la reunión mundial de Sindicatos, en aquella decisión de Belgrado por el desarrollo; si hay lo que nosotros planteamos. Naturalmente esto exigiría unos acuerdos y esto exigiría otro Gobierno, otra política de progreso y no una política de división nacional e internacional ante la crisis como la que se practica actualmente en nuestro país, naturalmente por la mayoría de UCD.

Señoras y señores Diputados, es por estas razones por las que el Grupo Parlamentario Comunista ha mantenido una determinada actitud en torno a un proyecto que consideramos lesivo para los trabajadores, a una ley que nacerá ya —diríamos— en unas condiciones extremadamente negativas para el empleo, para la sociedad española, para todo el pueblo de nuestro país.

Nada más, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Cuartas Galván.

El señor CUARTAS GALVAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, después de la intervención del señor Camacho, que más parecía a la totalidad del proyecto de ley que a este artículo 1.º, quisiera centrarme nuevamente en lo que es este artículo y hacer algunas reflexiones sobre el mismo y sobre las razones que han llevado a nuestro Grupo a votar afirmativamente.

Creo que la posición del Grupo Centrista quedó perfectamente clara en la Comisión. Allí, con motivo de la enmienda presentada por Coalición Democrática, tuvimos oportunidad de explicar, aunque el señor Senillosa, en nombre del Grupo, la había retirado —y ello dió oportunidad también al Grupo Socialista de mantener sus posiciones—, cuál era la postura del Grupo Centrista y cuáles eran los criterios que nos movían a ella.

Hay que decir que el Grupo Comunista no había presentado enmiendas a este artículo, a pesar de que ahora haya hecho una defensa tan enorme, y por eso se ha tenido que referir a todas las cuestiones ajenas al propio artículo, ya que sobre el mismo había muy poco que decir.

Lo que no tenemos que confundir es la elaboración de la política de empleo con la colaboración en la misma. Fue esto lo que se discutió en la Comisión y esto es lo que había de importante en este artículo. Por lo tanto, creo que es conveniente definir claramente cuál es la posición al respecto.

La política de empleo corresponde elaborarla al Gobierno, lógicamente. Y le corresponde elaborarla dentro de los criterios generales de la política económica. Es indivisi-

ble la política de empleo de la política económica y de la política general que tenga que seguir el Gobierno. Por ello el Gobierno no puede dimitir de esa responsabilidad, el Gobierno no debe dimitir de esa responsabilidad, el Gobierno no debe abandonar esa responsabilidad que le corresponde.

La política económica del Gobierno responde a los intereses de todo el pueblo español, no de un sector determinado. Esta debe ser la política del Gobierno y esa es la política del Gobierno de UCD. En los debates de tipo económico que se han mantenido en esta misma Cámara ha quedado perfectamente claro cómo quedaba encuadrada esa política de empleo dentro de la política general del Gobierno y dentro de la política económica.

Deben tenerse en cuenta todos los factores que influyen en la economía, debe tenerse en cuenta el orden de prioridades que es necesario establecer. No se puede hacer demagogia sobre un tema concreto, por muy bonito que éste sea y por muy bien que pueda sonar a los oídos del pueblo español o de determinados sectores.

Debe tenerse también en cuenta la situación internacional. Se ha dicho muchas veces —y aquí se ha explicado claramente— cómo estamos en una situación internacional en la que en estos momentos el signo de la emigración española ha cambiado y cómo tenemos que sufrir las consecuencias de los emigrantes que retornan, a los cuales tenemos que buscar solución, para los cuales se está intentando buscar solución.

Querér imputar a esta ley una serie de problemas, cuando todavía no ha entrado en vigor; decir que es responsable de una situación, es absurdo, o por lo menos significa tener muy poco sentido de la realidad, salvo que ello permita al Grupo Comunista y al señor Camacho decirnos las frases y los latiguillos a los que nos tienen acostumbrados normalmente. Porque, señor Camacho, hay que decir la verdad al país y tenemos que explicarle lo que cuestan las propuestas que hacemos y las que nosotros aprobamos aquí. Hay que decir lo que cuestan y de dónde va a salir el dinero, y como consecuencia de ello tenemos que aceptar toda la responsabilidad que nos corresponda.

Se dice que no se pretende crear empleo.

Ello significaría no leer lo que dice el artículo 1.º, y en definitiva lo que el señor Camacho ha hecho ha sido hablar de cosas distintas a lo que dice el artículo 1.º El artículo 1.º, en su número 2, dice: «Las medidas de política de empleo previstas en la presente ley se adoptarán en el marco de la política económica del Gobierno, de forma que permitan conseguir y mantener el nivel de pleno empleo, mejorar la estructura ocupacional y fomentar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo». Todo ello, lógicamente, dentro del marco de posibilidades que en cada caso se puedan tener posibilidades, posibilidades que se tienen que contemplar de forma realista y no de forma utópica.

Dentro de esa responsabilidad que corresponde al Gobierno de elaborar la política de empleo, si podemos considerar, si se debe de considerar la colaboración que se pueda obtener de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales, tal como se vio en la Comisión y tal como quedó perfectamente claro como consecuencia de una enmienda transaccional del Grupo Centrista con una enmienda Socialista, y apoyándose precisamente en la enmienda que había presentado —la enmienda número 88 —Coalición Democrática, por la cual, en el artículo 3.º de esta ley, se contempla la colaboración de estas organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales dentro del INEM, como organismo gestor que es de la política de empleo.

Esta colaboración que, como saben Sus Señorías, está perfectamente de acuerdo con las recomendaciones y con los convenios de la OIT; colaboración que debe existir y que existe en nuestro país, como en todo Estado democrático, y que nuestra propia Constitución recoge en su artículo 7.º, cuando establece que «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios».

Todo ello, Señorías condujo a nuestro Grupo a votar favorablemente el dictamen. Consideramos que recoge las aspiraciones que los distintos Grupos habían expuesto, en lo que se refiere a este artículo 1.º, en la Comisión, y que, en definitiva, este artículo 1.º lo que permite es establecer la definición de lo que

se pretende que sea la política de empleo: una política coherente, una política encuadrada dentro de la política general que tiene que hacer el Gobierno y, en consecuencia, la política que en cada caso se tendrá que aprobar en función del contexto general.

Por todo ello nuestro Grupo ha votado favorablemente, por considerar que responde a la política de que hemos hablado.

Nada más y muchas gracias.

Artículo 2.º El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Comunista, a la letra d) del artículo 2.º

El señor Pérez Royo tiene la palabra para su defensa.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, efectivamente tomo la palabra para defender nuestra enmienda número 12 de sustitución al artículo 2.º, letra d).

La razón de nuestra oposición a la definición de objetivos de la política de empleo consignada en el artículo 2.º, y específicamente en la letra d), a la cual se refiere nuestra enmienda, radica fundamentalmente en el papel eminentemente pasivo que se asigna a la política de empleo; papel pasivo que se conecta precisamente con la filosofía de instalación en la crisis propia de este Gobierno y a la cual ha hecho referencia, en su anterior intervención, mi compañero Marcelino Camacho; proposición de instalación en la crisis, afirmación o filosofía de instalación en la crisis con la cual se conecta esa otra afirmación, muy repetida estos días, relativa a que el empleo es un bien escaso que es necesario distribuir adecuadamente.

Sin negar radicalmente esta afirmación, sí que nos interesa señalar que hay dos cosas en la misma, o implícitas en la misma, que consideramos inaceptables. En primer lugar, no aceptamos, no consideramos aceptable la resignación ante dicha escasez de empleo que se manifiesta en la propia proposición de objetivos que se marca en el dictamen. En segundo lugar, tampoco consideramos aceptables —y a esto se refiere específicamente nuestra enmienda— las técnicas de adecuación entre oferta y demanda de trabajo basadas solamente en la subordinación del trabajo

al capital, y en cualquier caso en una actitud puramente pasiva ante la crisis y los desequilibrios que la propia crisis vienen a agravar.

Cuando en este país, y muchas veces desde esta tribuna, se habla de los desequilibrios básicos que aquejan a la economía española, y cuando quien habla es el Gobierno o el Grupo de UCD, con más frecuencia de lo que fuera de desear, hay una omisión significativa al hablar de estos desequilibrios, y es la referente a lo que desde nuestro punto de vista constituye uno de los problemas más preocupantes y amenazadores para nuestras convivencias, es decir, el de los desequilibrios territoriales existentes en nuestro país. Yo mismo desde esta tribuna he tenido ocasión de denunciar en más de una ocasión la ausencia clamorosa (decía en una ocasión y vuelvo a decirlo ahora), en el Plan Económico del Gobierno presentado ante esta Cámara el septiembre pasado, de una política efectiva de corrección de desequilibrios territoriales.

La semana pasada, cuando el señor Ministro de Economía, precisamente en cumplimiento de una de las resoluciones aprobadas como consecuencia del debate sobre política económica del Gobierno, compareció ante la Comisión de Economía para dar cuenta de la marcha de la economía española, trataba una vez más de los desequilibrios básicos de nuestra economía, volvía a surgir la significativa omisión de los desequilibrios territoriales, que fue subrayada precisamente en su pregunta creo que por el representante del Grupo Andalucista, mi compañero Pérez Ruiz.

Creo que son elementos significativos y preocupantes, por lo que quiero conectarlos con nuestra enmienda. La afirmación de que el empleo se encuentra desigualmente repartido geográficamente es un tema que no hace falta repetir. Tampoco hace falta insistir sobre los datos que están en la mente de todas Sus Señorías.

Nosotros estimamos que corresponde interrogarnos por las razones de esa situación, por la responsabilidad que cabe atribuir en su creación a las políticas seguidas en este país en cuanto a asignación de los recursos humanos y de capital y por las perspectivas de política en el futuro. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

La existencia de bolsas de paro en nuestra economía está claro que constituye uno de los desequilibrios más graves de la misma y, como decía anteriormente, es un desequilibrio amenazador para nuestra propia convivencia. En cualquier caso hay que resaltar (porque con frecuencia se olvida, sobre todo en los momentos actuales, cuando se han achacado todas las culpas a la crisis y a sus causas reales o presuntas), hay que resaltar que se olvida que estas bolsas de paro no son un fenómeno recién creado por la crisis, sino que son bolsas estructurales. Tengo aquí ante mí, en la tribuna, una serie de estadísticas que contemplan la evolución por semestres de la tasa de desempleo, segregada por provincias, desde el año 1972 al 1979; desde 1972, en un momento en el cual en este país no había la crisis económica actual, o al menos no con la gravedad de la de hoy, aunque ya existían nubarrones en el cielo, pero que no existía esa crisis económica.

Pues bien, en el segundo semestre de 1972 el diferencial, como se dice ahora, en términos relativos de la tasa de paro en las provincias más castigadas por el mismo (por ejemplo, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Badajoz, por hablar de las que me son más próximas), el diferencial, insisto, era superior en 1972, en estas provincias, respecto de la media nacional, al registrado actualmente. En 1972, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Badajoz y Huelva, cuando España tenía una tasa de paro del 2,1, tenían ya una tasa propia de crisis: Cádiz, 7,9; Córdoba, 7,3; Sevilla, 7,4; Badajoz, 6,3; Huelva, 7,2. Es decir, pasaban del 7 por ciento, tasas a las cuales no llegan hoy la mayor parte de los países europeos, en pleno momento de crisis. Se trata, como digo, de una situación de bolsas estructurales de paro.

Está fuera de duda que la generación de esas bolsas de paro incumbe a la ausencia de política regional de tiempos pasados, prolongada en el presente. Como han puesto de relieve los estudiosos del tema, y cito una comunicación presentada en un seminario franco-español sobre política de empleo, la política regional que se ha seguido en España no ha tenido en cuenta entre sus objetivos el de igual oportunidad regional de empleo ni el más acuciante de potenciar la generación de puestos de trabajo.

Sin hablar de los ridículos resultados de la política de Polos, cabe señalar como ejemplo de esta ausencia de previsión la extremada concentración regional de los programas de inversión pública, y la aún mayor concentración de la inversión pública directamente productora de puestos de trabajo desarrollada por el INI y, por último, los incentivos a la iniciativa privada, que se han utilizado como instrumento de política regional en un sentido de favorecer fundamentalmente la inversión intensiva y el capital frente a la generadora de puestos de trabajo. Para no cansar a Sus Señorías, y para ilustrar la anterior afirmación, y por elegir lo que para mí es más significativo, les cito el tanto por ciento cualitativo de la inversión del INI, expresada en términos del inmovilizado acumulado en las regiones españolas con mayor grado de paro.

En Andalucía, el tanto por ciento de la inversión del INI es el 4,2 por ciento del total del INI; en Extremadura, el 1,9; en Canarias, el 1,6, cuando está claro que el peso de estas regiones en población y, por supuesto, en tasas de paro, es muy superior al que reflejan estas cifras que someto a la consideración de Sus Señorías.

No considero necesario alargar esta intervención insistiendo sobre los efectos de la política pasada. Sí quiero dar una pincelada sobre la política presente, sobre el momento actual, actualísimo.

Esta mañana, al recoger del casillero el material, los papeles del Congreso sobre los «Boletines Oficiales de las Cortes Generales», encuentro la respuesta a una pregunta que yo mismo había hecho sobre el presunto programa de inversiones públicas para Andalucía que, según se encargó de repetir la Prensa en la época crucial anterior al 28 de febrero (la campaña del Referéndum andaluz), entonces tenía el Gobierno. En la respuesta se dice textualmente: «El Gobierno no tiene un programa global de inversiones públicas en Andalucía ni en ninguna otra región». Es una afirmación que está fechada el 17 de junio de 1980, y que pone en dificultades a diversos representantes de la UCD andaluza que estos días, cuando se trataba del Plan de Inversiones propuesto por la Junta, decían que el Gobierno tenía otro mejor. Es una afirmación lo suficientemente rotunda como para eximir-

nos de una glosa, de una mayor glosa en esta tribuna. Naturalmente que en Andalucía no faltará quien ponga la glosa necesaria a esta rotunda afirmación.

Volviendo al texto de la ley, ¿cuál es la definición que en relación a este punto nos ofrece el artículo 2.º que estamos criticando? No existe en dicho artículo ninguna mención a desequilibrios territoriales. Al contrario, hay simplemente insistencia sobre la movilidad geográfica y ocupacional.

Señoras y señores Diputados, aquí es precisamente donde radica uno de los males fundamentales de la política que acabamos de criticar, y que nos tememos que tendremos que seguir criticando en el futuro, precisamente en la consideración unilateral de la movilidad geográfica, en la política de fomentar el desplazamiento masivo de pueblos enteros, en el desplazamiento del trabajo hacia la capital, sin preocuparnos contemporáneamente de crear condiciones para la industrialización de las zonas de emigración. Por otra parte, ¿cuál ha sido el desplazamiento laboral implícito en la política de movilidad geográfica indicada? En medida muy considerable, los trabajadores que venían expulsados de la agricultura pasaban a la construcción, de peonaje a peonaje, sin ninguna cualificación. Las consecuencias de esto están igualmente claras cuando hoy, en los cinturones industriales de las grandes aglomeraciones urbanas como en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, las tasas de paro alcanzan porcentajes que superan la media nacional y se convierten ellas mismas en bolsas de paro. Hay que pensar y decir que en dichos cinturones industriales los primeros que han ido al paro son los que, huyendo del desempleo, rechazados de la agricultura, fueron empleados en condiciones precarias precisamente por una política de movilidad geográfica del signo indicado.

Parece de todo punto necesario, y nosotros no cesaremos de repetirlo, iniciar una actuación de solidaridad social y nacional hacia aquellas regiones y nacionalidades más afectadas por la crisis, por su más endeble posición en la economía española. Eso es lo que propone nuestra enmienda. Dicha actuación contribuiría a mejorar las expectativas globales de nuestro futuro económico y a dismi-

nir las desigualdades regionales que tan duramente pesan sobre nuestra situación.

Lo que proponemos, en resumen, es una política diferencial de empleo cuyo primer componente es precisamente el componente activo del fomento del empleo en las zonas atrasadas, en las bolsas de paro. Una política diferencial que tenga objetivos diversos o acciones específicamente precisas en relación a estas bolsas de paro. Solamente de manera subordinada en relación a este elemento positivo y en coordinación con él, es como comprendemos la movilidad geográfica y ocupacional imprescindible. No nos oponemos a la movilidad geográfica y ocupacional, pero la calificamos en conexión con esta política, porque de otra forma, como digo, no sólo no solucionamos el problema del empleo, sino que podemos contribuir a agravarlo en la dirección que he indicado.

Para finalizar, una última advertencia sobre el carácter de nuestra enmienda, que se refiere, como habrán podido observar Sus Señorías, a la definición de objetivos. Puede parecer, en ese sentido, una enmienda ingenua, en la medida en que se contenta con hacer una oferta de definición programática con un carácter declarativo, que generaría, de ser aceptada, únicamente un compromiso político para el Gobierno. Es, en definitiva, el estilo de una moción generadora de un compromiso político para un Gobierno como éste, que ha hecho repetidas veces gala de no excesivo cumplimiento de estos compromisos y, concretamente, de los compromisos contraídos como consecuencia de mociones aprobadas en esta Cámara.

Pero, evidentemente —y con esto quiero concluir—, este país no está condenado a tener este Gobierno indefinidamente. Si nosotros pedimos ahora la aprobación de nuestra enmienda es de cara a dejar marcados unos objetivos a un futuro Gobierno con una voluntad política de desarrollar una auténtica política de empleo, digna de tal nombre.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de esta enmienda?

Tiene la palabra el señor Fernández Arias.

El señor FERNANDEZ ARIAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, sean

mis primeras palabras, señor Pérez Royo, para agradecerle su intervención en lo poco que tiene de defensa de su enmienda y en lo mucho que ha hecho de la defensa global de una política de empleo que usted desearía que existiera.

Debo aclarar que este artículo 2.º tiene cinco letras. A los tres primeros, a), b) y c), han sido incorporadas dos enmiendas del Partido Comunista de España, la 10 y la 11, y en votación en Comisión este artículo no ha tenido ningún voto en contra. Quiero aclararlo, para que la Cámara también se dé cuenta de qué es lo que ha pasado en Comisión.

Esta enmienda trata del desarrollo de las nacionalidades y regiones, que viene perfectamente aclarado en el artículo 5.º, número 3, que dice así: «Las medidas de fomento del empleo podrán establecerse con carácter selectivo, para zonas geográficas en las que el paro tenga mayor incidencia, para sectores económicos en crisis y para colectivos determinados de trabajadores con dificultades de colocación». Esto quiere decir que esos desequilibrios de los que usted hablaba aquí en la tribuna quedan perfectamente recogidos en el artículo 5.º, número 3. Para cuando eso suceda, este articulado, puesto en marcha, puede llevar esto a ese fin.

También quería decirle que no parece lógico que el Grupo Parlamentario de UCD asuma la finalidad de su enmienda, porque se daría el caso de que si protegieramos las zonas ya desarrolladas, con mayor tasa de empleo —podría dar el ejemplo de Cataluña y León, ya que León tiene menor tasa de empleo que Cataluña—, con su enmienda lo que estaríamos haciendo sería programar y desarrollar una región ya desarrollada. Por eso en el artículo 5.º, 3, se dice bien claramente que se pueden promocionar y potenciar los sectores en crisis o aquellos sectores industriales que sean necesarios.

En lo que se refiere a la movilidad geográfica y ocupacional, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el texto del artículo tal y como está en la ley, porque indudablemente hay que tomar medidas de promoción de empleo, puesto que en una crisis como la actual, en la que hay falta de empleo, lo que hay que hacer es tomar medidas de protec-

ción del empleo y creación de puestos de trabajo. Y cuando estamos hablando, como usted hablaba en la tribuna, de que nuestros emigrantes, desgraciadamente, tienen que venir a incorporarse a su país —digo desgraciadamente porque en este momento hay falta de empleo—, lo lógico es que se incorporen a su país y que puedan vivir en su país. En la letra d) del artículo 2.º se dice claramente que se adoptarán medidas que posibiliten la información, orientación, formación y promoción profesionales de todo este núcleo de personas.

Esto quiere decir que estamos haciendo una ley que no tenemos, y lo que pretende esta ley es ponernos a la altura del avance e iniciativa de los diferentes países europeos, porque se puede comparar con otras leyes del Mercado Común Europeo. Esto es lo que pretendemos. Estamos de acuerdo.

Como usted dice, hay una tasa elevada de desempleo. Esa tasa creemos sinceramente que se puede bajar o descender con estas medidas, porque todos sabemos que la picaresca en la Ley de Paro actual es grandísima y no se está protegiendo al verdadero desempleado, sino protegiendo a un núcleo o grupo importante a través de empresarios y trabajadores, que están cogiendo unos dineros que no son de ellos, sino que deberían ser de este núcleo de parados que hay en el país. Por esto creemos que el número 3 del apartado 5 protege estos desequilibrios territoriales, pero los protege con justicia, no protegiendo a aquellas zonas que ya están desarrolladas. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Muy brevemente, señor Presidente, para recordar algunas de las argumentaciones que he desarrollado anteriormente en la tribuna.

Es verdad que en el artículo 5.º se habla de fomentar el empleo en zonas atrasadas, pero es que nosotros lo que hablamos es de medidas de programación del desarrollo, no de medidas puntuales para fomentar el empleo, como puede ser el empleo comunitario o para fomentar el empleo juvenil, que habrá que estudiarlas en su momento, sino de una

política de desarrollo, de programación del desarrollo de las zonas atrasadas del país, de manera que se evite el espectáculo lacerante que hoy contemplamos de los desequilibrios territoriales.

Es verdad —y yo mismo lo he resaltado en la tribuna— que actualmente las bolsas de paro no se concentran solamente en Andalucía, Canarias y Extremadura, sino que el cinturón industrial de Barcelona y de Madrid son también bolsas de paro. Y he analizado el problema, pero me he cuidado muy mucho de argumentar, explicando la diferencia entre uno y otro tipo de bolsas de paro, porque toda Andalucía y toda Extremadura son bolsas de paro, un paro estructural, como consecuencia de una postergación histórica de estas regiones. Y no puede afirmarse lo mismo de Cataluña o del País Vasco. Por eso pueden encontrar acomodo las medidas de fomento del empleo a que se ha referido el señor representante de UCD para estas bolsas de paro en las zonas desarrolladas, pero hay que hacer, insisto —y era el sentido fundamental del objetivo que proponíamos en esta enmienda—, una política diferencial en cuanto al empleo, porque no se puede dar el mismo trato a Cataluña y al País Vasco que a Andalucía, ni a las bolsas de paro existente en uno y otro caso, porque cualitativamente son diferentes.

Por ello me he cuidado muy mucho de citar no solamente las cifras de paro actual, que, por otra parte, por escandalosas, están en la mente de todos ustedes, sino que me he preocupado de citar las cifras de paro en Andalucía, Extremadura y Canarias en épocas de prosperidad y que hoy no alcanzan la mayor parte de los países europeos. En cualquier caso, hoy la tasa de paro a nivel nacional es del 2,1.

Creo que ustedes no han entendido el sentido de nuestra enmienda, porque, en definitiva, el tipo de argumentación que han desarrollado contra ella no se ha dirigido a lo que constituye el núcleo esencial de ella, que era la proposición de una política diferencial de empleo y de desarrollo para solucionar precisamente estos problemas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Arias.

El señor FERNANDEZ ARIAS: Nosotros claro que comprendemos esa política diferencial que existe precisamente en el artículo 5.º si se lee muy despacio. Estoy de acuerdo con que lo que pensamos los Diputados de UCD no lo pueden pensar los del Partido Comunista de España. Es lógico. Pero es que aquí está reflejado eso que usted está exponiendo, señor Pérez Royo. Lo que sí se puede hacer, a partir de esta ley, es potenciar eso que usted está diciendo para que no pueda haber esa discriminación entre unas regiones y otras. Estamos todos de acuerdo, porque toda persona que quiera decir que Andalucía no ha sido discriminada en estos años anteriores, creo que tiene base para poder defender esta tesis. Estamos todos de acuerdo, pero lo que deseamos con esta ley es precisamente potenciar esas zonas subdesarrolladas, y esto lo dice la ley.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 2.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 133; en contra, 157; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 2.º

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 2.º conforme a los términos del dictamen de la Comisión. (El señor Peces-Barba pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista solicita que se vote por separado la letra e) del artículo 2.º La última letra.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Pedimos votación separada de las letras d) y e). Por nuestra parte pueden votarse conjuntamente las letras d) y e).

El señor PRESIDENTE: Hay que separarlas. Votamos el artículo 2.º en los términos del dictamen de la Comisión, salvo las letras d) y e), que serán objeto después de votación separada. De manera que votamos el artículo 2.º, salvo las letras d) y e).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 290; en contra, dos; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2.º en los términos del dictamen de la Comisión, en la parte que ha sido sometida a votación.

Votamos ahora separadamente el párrafo identificado con la letra d) de este artículo 2.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 268; en contra, 22; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión la letra d) del artículo 2.º

Votamos seguidamente la letra e) de este mismo artículo 2.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 158; en contra, 25; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la letra e).

Como consecuencia de las diversas votaciones realizadas, el artículo 2.º queda aprobado en su integridad en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Entiendo que para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, tiene la palabra el señor Valentín.

El señor VALENTIN ANTON: Señor Presidente, Señorías, nosotros hemos votado favorablemente la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Comunista, en primer lugar, por entender que esta enmienda tiene su emplazamiento casi exacto en el artículo que

acabamos de aprobar, ya que si bien el artículo 2.º habla de objetivos de política de empleo en términos generales, también en este artículo se manifiestan los canales a través de los cuales se tiene que llevar a cabo la política de empleo. Es decir, en este artículo 2.º no solamente se habla de que hay que aumentar el nivel de empleo, sino que, a renglón seguido, se habla de que se potenciarán las industrias y sectores por una utilización intensiva del sector trabajo. Eso me parece que debía haber sido complementado con una mención expresa a las regiones y a las nacionalidades, en definitiva, a las zonas. Nos parece que sería una complementación que sistemáticamente hubiese enriquecido el texto. En segundo lugar, hay una cuestión de fondo que no quiero dejar pasar la ocasión de hablar de ella, y es la que hace referencia a nacionalidades y regiones, sobre todo tratando de deshacer un equívoco, o un posible equívoco, que puede existir en esta Cámara, y posiblemente en este país, en el sentido de que Cataluña y las zonas industrializadas puedan ser, poco más o menos, un edén del pleno empleo. Para dar algunos datos que ilustren algunas de nuestras intervenciones de aquí en adelante, diremos que, según datos registrados, en Cataluña hay más de 200.000 trabajadores sin empleo. En Barcelona hay registrados más de un 10 por ciento de trabajadores en desempleo, y hay una zona concreta, la zona del Vallés occidental, que registra un porcentaje de más del 16 por ciento. Digo esto para no hacer comparaciones odiosas, o agravios comparativos, como se decía en días atrás, que puedan desdibujar las situaciones.

Dicho esto, nosotros estamos de acuerdo en la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario Comunista en lo que se refiere al fondo, porque en la medida en que desde el Gobierno se debe propiciar una política de empleo, lógico es tener en cuenta, de la misma manera que hay que tener en cuenta los sectores, aquellas zonas más deprimidas y más azotadas por el fenómeno del paro. Nosotros entendemos que la palabra es solidaridad, y que zonas tan incuestionablemente afectadas por esta lacra, como es Andalucía y otras más, deben de tener una dedicación preferente, deben merecer una dedicación especial por parte del Gobierno.

Por lo tanto, por la cuestión de forma, por el emplazamiento sistemático del tema y por la cuestión de fondo que hace referencia a la solidaridad y a las prioridades de atención que merece este tema, los Socialistas de Cataluña hemos votado favorablemente la incorporación del texto que proponía el Grupo Parlamentario Comunista.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Castellano.

El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, no es para explicación de voto, sino para llamar la atención de la Presidencia y de la Cámara sobre el hecho de que, al transcribir en el «Boletín Oficial de las Cortes» el dictamen de la Comisión, precisamente en el apartado a) debe faltar algo, cuando dice «... utilización intensiva del factor trabajo y a través de programas específicos a fomentar la colocación...». Yo creo que debe decir: «... a través de programas específicos destinados a fomentar la colocación...», tal como venía en el primer borrador del dictamen surgido en la Comisión, porque, al fin y al cabo, vamos a aprobar un dictamen definitivo que luego irá al Senado y para que no quede ese vacío, no sólo por coherencia jurídica, sino por estética gramatical del propio texto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano. ¿Hay alguna objeción? (Pausa.) ¿Están de acuerdo en que se incorpore la palabra «destinados» antes de «a fomentar»? (Asentimiento.) Conforme, queda introducida esa corrección.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO GARCIA: Brevísimamente para expresar tres observaciones. La primera de ellas, la perplejidad del Grupo Centrista por la votación negativa del Grupo enmendante a la actual letra d) del dictamen. Es lo cierto que el Grupo enmendante enmendaba la aparente letra d), pero ciertamente a lo que se refería en el dictamen era a la

letra e). Por tanto, yo quiero leer el texto al que se han opuesto los señores Diputados del Grupo Comunista, que dice: «Lograr el mayor grado de transparencia del mercado de trabajo mediante una adecuada gestión de la colocación y de la adopción de medidas que posibiliten la información, orientación, formación y promoción profesionales».

Por otro lado, decir también al señor Pérez Royo que, ciertamente, en la contestación a la que ha hecho referencia se puede extrapolar textualmente lo que él ha leído. Efectivamente, dice en el punto número 1 que el Gobierno no tiene un programa global de inversiones públicas en Andalucía ni en ninguna otra región. Pero no es en ese texto o en ese párrafo en el único en el que se habla de Plan, con mayúscula, porque, ciertamente, no hay plan regional para Andalucía ni para otras regiones, porque, de haberlo, lógicamente, tendría que saber algo y haberlo aprobado la Cámara; pero sí hay otro concepto distinto, que es un Plan trienal de inversiones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que es al que se referían algunos portavoces centristas de Andalucía, y a nivel nacional, cuando hablaban de ese volumen global de inversiones en Andalucía que podría acercarse a 470.000 millones de pesetas en el trienio 1981-83, y que, en concreto, en Andalucía, de este Plan que prevé tal inversión, hay ya más de 30.000 millones de pesetas en obras que estaban en ejecución al terminar el año 1979.

Finalmente, una brevísima puntualización al portavoz de Socialistas de Cataluña, que hablaba en concreto de una determinada comarca con particulares cotas de depresión en el empleo. Yo quiero decirle —mejor dicho, recordarle, porque sé que el señor Valentín conoce el tema— que nuestro Gobierno en este año 1980 estableció un Decreto con medidas específicas para el fomento del empleo en la comarca del Bajo Llobregat, del Vallés Occidental y del Vallés Oriental. El porqué está claro, porque entendemos que igual que hay sectores específicos en crisis, hay comarcas o zonas concretas que merecen esa protección, como es obvio, estén donde estén del territorio, porque precisamente nuestra filosofía parte de que debemos ayudar allá donde esté el problema, sea a nivel re-

gional, sea a nivel provincial, comarcal, por sectores o por empresas.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: El señor Pérez Royo, para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra.

El señor PEREZ ROYO: Precisamente para explicar nuestro voto y decir, en primer lugar, que la votación negativa a la letra d) se debe, señor Moreno, sencillamente a un error, y así lo reconocemos; un error personal mío como consecuencia de que, al haberse corrido la numeración en estos artículos, nuestra enmienda, que primeramente era a la letra d), actualmente es a la e). Ha sido, por tanto, un error de esa naturaleza.

En segundo lugar, sobre el problema del programa de inversión pública para Andalucía, creo recordar que las palabras eran «Programa para Andalucía». Sobre este tema, no es el momento de tratarlo y, por tanto, no vamos a seguir hablando de él; podríamos hacerlo y sacar muchas conclusiones. En ese programa se dan una serie de cifras y se confirma una afirmación que yo hice desde esa tribuna (*Señalando a la de oradores*) con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado, y era que, en términos relativos, la inversión pública para Andalucía y otras regiones, en concreto para Extremadura, descendía; afirmación que fue refutada por el señor Oliart en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado y que hoy se confirma con este papel que nos refleja el Gobierno. Si ustedes cogen la maquineta y hacen la cuenta, verán cómo, en términos relativos, la inversión pública para Andalucía tiende a descender, y todavía más en 1979. Pero, en todo caso, insisto, éste no es el tema que nos traía aquí, del que ya tendremos ocasión de hablar largo y tendido.

Nada más, y muchas gracias.

Artículo 3.º El señor PRESIDENTE: Entramos en el artículo 3.º

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al artículo 3.º Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, nuestra enmienda se refiere a la de-

nominación que en dicho artículo 3.º se hace de los órganos del Instituto Nacional de Empleo, donde se reconoce, no por esta ley todavía lógicamente, pero sí ya por normas reglamentarias y en la práctica —porque están funcionando ya esos órganos—, una participación de las centrales sindicales representativas y de las asociaciones empresariales.

En la enmienda originaria que dio lugar en Comisión a la inclusión de parte de aquella enmienda en el texto del dictamen se hablaba de los órganos del Instituto Nacional de Empleo, pero los representantes de Unión de Centro Democrático, el Grupo Centrista, insistieron en aquel momento, y ganaron la votación, en que se denominasen «órganos consultivos». Es decir que, según el texto del dictamen y según Unión de Centro Democrático, sólo en aquellos órganos del Instituto Nacional de Empleo que sean consultivos y, por tanto, no tengan una función que vaya más allá de la mera consulta, puede haber participación de organizaciones empresariales y centrales sindicales.

El hecho es que en los decretos, en las normas reglamentarias que han creado provisionalmente esta figura del Instituto Nacional de Empleo se denominan órganos directivos al Consejo General y a la Comisión Ejecutiva del INEM, donde no sólo está reconocida la participación activa de las centrales sindicales, sino que de hecho se está llevando a cabo ya. En el Reglamento de funcionamiento del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo, donde existen trece representantes de centrales sindicales y trece de asociaciones empresariales —recientemente discutido, por cierto—, se dice claramente que las funciones que corresponden al Consejo General del INEM, las funciones que resulten propias de su condición de órgano directivo son, en especial, las siguientes: elaborar criterios de actuación, controlar la gestión del mismo, colegiadamente; elaborar el anteproyecto de presupuestos, aprobar la Memoria anual para llevarla al Gobierno, etc.; funciones que, lógicamente, no son propias de un órgano que va más allá de la mera consulta a los participantes en ese órgano. Incluso en el artículo 40 del dictamen que estamos discutiendo se hace una remisión explícita a los órganos directivos del INEM. Por eso nuestra enmienda va en el sentido de su-

primir la mención a dichos órganos adjetivándolos de consultivos; y, en todo caso, si parece más procedente, ya que la terminología está siendo acuñada en la propia actividad de las centrales sindicales, dentro del Consejo General y en la Comisión Ejecutiva del INEM, en vez de ser una mera supresión de la palabra «consultivos», inclúyase la calificación de «directivos» a dichos órganos, con lo cual estaríamos haciendo una ley coherente con la realidad que estamos viendo ya.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra de esta enmienda tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO GARCIA: Señor Presidente, Señorías, no es exactamente un turno en contra, porque al final de la intervención del portavoz socialista nos da la impresión de que ha introducido un factor que pudiera servir para que por vía transaccional aceptáramos lo que en espíritu han defendido, tanto en Comisión como aquí, los portavoces del Grupo Socialista.

Efectivamente, la enmienda originaria hablaba de «en cuyos órganos», sin más, y en la motivación escrita la única razón que se esgrimía era la congruencia con los textos de la Organización Internacional de Trabajo.

Yo quiero recordar aquí que nosotros, basándonos en estos textos, pedimos que apareciera la palabra «consultivos», sin perjuicio de que, como ya decíamos en Comisión y repetimos ahora, más adelante, en la ley, se concretaría, en alguno de los niveles más importantes del INEM, la participación exacta de las centrales sindicales y de las patronales.

En concreto, yo quiero leer dos o tres textos de la OIT que expresan sin dudas ese carácter consultivo que nosotros aceptamos y que vamos a intentar, con unas clarificaciones, por vía transaccional, que se mantenga en el actual artículo 3.º

Dice el artículo 5.º del Convenio 88 que «la política general del servicio de empleo, cuando se trate de dirigir a los trabajadores hacia empleos disponibles, deberá fijarse previa consulta a los representantes de empleadores y de trabajadores», etc. En el punto 6.º de la Recomendación 122, relativa a política

de empleo, se dice: «Todo miembro debería, en consulta con los trabajadores y con los empleadores y sus respectivas organizaciones», etc. El artículo 3.º del Convenio 122, textualmente dice: «En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas», etc. Quiere ello decir que no era una invención del Grupo Centrista el poner el adjetivo «consultivos».

No obstante, es lo cierto que en el artículo 40, número 3, del texto del dictamen se habla de que en determinados órganos directivos tendrán participación paritaria representantes de las centrales sindicales, de las patronales y de la Administración, razón por la cual el Grupo Centrista propondría, si el señor Presidente y la Mesa no tienen inconveniente, que el nuevo texto dijera: «Órganos consultivos y, en su caso, directivos...» y seguir el texto; es decir, añadir simplemente, en lógica correlación con la enmienda defendida por el portavoz del Grupo Socialista, la expresión, después de «consultivos», «y, en su caso, directivos».

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, el texto que ha leído el representante del Grupo Centrista de algunos párrafos de Convenios de la OIT suscritos por España habla, efectivamente, de consultas. Lo que ha ocurrido en este país es que se ha consultado ya a los representantes de los trabajadores y de los empresarios en un organismo creado por vía reglamentaria, pero que ya está empezando a funcionar, y no voy a calificar su tipo de funcionamiento, que será objeto de otras intervenciones a lo largo de este debate. Se ha consultado ya, repito, a los interlocutores sociales, y éstos lo que han dicho y votado es que no quieren estar allí en una labor meramente consultiva, sino que han redactado un reglamento, que ha salido con sus votos, donde dicen que las funciones del Consejo General van más allá de una mera labor consultiva, ya que es un organismo que elabora criterios de actuación, controla la gestión, elabora el anteproyecto de presupuestos y aprueba la Memoria anual.

Por tanto, la consulta fue un paso previo y ya estamos en la realidad de la ley en este momento y en la realidad del Consejo General del INEM. Se ha realizado la consulta y los consultados han dicho: «No queremos ser órgano consultivo, sino directivo».

Por esta razón no podemos aceptar la enmienda transaccional y pedimos que se vote nuestra enmienda y si no el texto del dictamen.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO GARCIA: Señor Presidente, para pedir, si no hay inconveniente por parte de ningún Grupo, que, no obstante, se vote nuestra enmienda.

Entendemos que es mejor el texto que resulta de ella, porque, ciertamente, en este artículo se hablaba tan sólo de órganos consultivos. Llegado que fue el artículo 40, 3, en Comisión se aceptó que hay unos órganos directivos y que en todos ellos no puede haber participación de las centrales sindicales y de las patronales, porque uno de los tres órganos directivos es unipersonal: el Director del Instituto Nacional de Empleo, y a ese nivel de organización unipersonal es evidente que no puede haber participación de ningún órgano colectivo.

Lo que entendemos es que es más congruente con el resultado total de la ley, que no tiene nada que ver con la presencia o con posibles acuerdos a nivel reglamentario o a nivel tripartito en el seno de esos organismos. Lo que estamos aquí discutiendo creemos que es tan sólo el texto legal, y el texto legal, a nuestro juicio, mejora por vía transaccional si, además del carácter consultivo, se adiciona la expresión textual que diga: «y, en su caso, directivos».

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara si hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario para la admisión a trámite de la enmienda de transacción presentada por el Grupo Parlamentario Centrista y que supondría, donde el texto dice «en cuyos órganos consultivos», añadir «y, en su caso, directivos estarán representados...»

El señor ZAPATERO GOMEZ: Nosotros no nos oponemos a la tramitación de la enmienda de UCD, pero solicitamos que nuestra enmienda sea sometida a votación en primer lugar.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Vamos a proceder a la votación. Queda admitida a trámite esa enmienda y mantenida para votación la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al artículo 3.º, por la cual propone suprimir la palabra «consultivos».

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 137; en contra, 153; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto del artículo 3.º

Sometemos a votación seguidamente la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Centrista y admitida a trámite por la Cámara y que supone la adición de las palabras «y, en su caso, directivos» después de «consultivos».

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 179; en contra, 109; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Centrista respecto de este artículo 3.º

Sometemos a votación ahora el texto del artículo 3.º conforme al dictamen de la Comisión, quedando entendido que llevará incorporada la enmienda aprobada con anterioridad.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 185; en contra, 104; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 3.º conforme al dictamen de la Co-

misión y llevando incorporada la enmienda que ha sido aprobada con anterioridad.

No hay mantenidas enmiendas respecto del artículo 4.º, que sometemos ahora a votación.

Previamente, el señor Camacho Abad explicará el voto del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la votación del artículo 3.º Tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO ABAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es claro y conocido, por supuesto, nuestro criterio en torno al papel que deben jugar los órganos del INEM, y, naturalmente, estimamos que lo positivo de este propio INEM es la participación en el mismo de los trabajadores y, en cierto grado, el control que han de ejercer. Hemos votado afirmativamente la enmienda de los compañeros socialistas porque introducía, sin lugar a dudas, ese papel del control de los trabajadores y la participación. De todas las maneras, estimamos que, en esa línea, diríamos, de hacerlo lo menos malo posible, y derrotada la enmienda de los compañeros socialistas, la propuesta que hace UCD mejora, en parte, el texto del dictamen, porque admite que habrá órganos en los que los trabajadores jugarán un papel directivo.

Ese ha sido el tipo de voto que hemos realizado y por esas causas hemos votado afirmativamente dicha propuesta centrista.

Artículo 4.º El señor PRESIDENTE: Como decía anteriormente, no hay mantenidas enmiendas al artículo 4.º, por lo cual pasamos a votarlo.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 283; en contra, cuatro, abstenciones, tres; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 4.º, conforme al dictamen de la Comisión.

La sesión se reanudará a las cuatro y media. Hasta entonces se suspende la sesión.

Eran las dos y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

— SOBRE NUEVA ACCION CORDINADA Y DIRIGIDA POR ETA POLITICO-MILITAR EN ANDALUCIA Y EL PAIS VALENCIANO (PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOCIALISTAS DE CATALUÑA Y SOCIALISTA VASCO).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir, conforme se anunció esta mañana, la proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Socialistas de Cataluña y Socialista Vasco.

En primer lugar, y para consumir un turno a favor, tiene la palabra el señor Solchaga.

El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me toca a mí, como representante del Grupo Parlamentario Socialista Vasco, defender la siguiente proposición no de ley:

«El Congreso de los Diputados, ante la nueva acción terrorista coordinada y dirigida por ETA político-militar en Andalucía y en el País Valenciano, principalmente con colocaciones de bombas en zonas turísticas y de descanso, con la finalidad de obtener, por medio de la coacción y de la amenaza, determinados objetivos políticos, declara:

»Primero: que el Estado no aceptará, en ningún caso, entrar en negociaciones para discutir los referidos objetivos pretendidos por ETA político-militar.

»Segundo: que tales procedimientos suponen una cínica y criminal acción, inaceptable como método en cualquier país civilizado, que el Congreso de Diputados reprueba y condena.

»Tercero: que el principal perjuicio lo sufren los trabajadores y las empresas de las zonas afectadas, todos los ciudadanos residentes en las mismas y todas aquellas personas, nacionales o extranjeras, que pretenden pasar en ellas sus vacaciones.

»Cuarto: que los intereses colectivos y la economía general pueden verse seriamente

afectados por la incalificable campaña de ETA político-militar.

»Por tanto, requiere al Gobierno, a todas las autoridades y a todos los ciudadanos para que tomen todas las medidas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, para atajar la acción terrorista con toda la decisión y contundencia que las leyes permiten».

No entra en nuestra intención, al defender esta proposición no de ley, ni apuntarnos un tanto político, hijo de la oportunidad, ni tampoco recordar al Gobierno los deberes respecto de este tema, que estamos seguros que habrá de asumir y cumplir puntualmente.

Tampoco deseamos condenar la acción de un grupo terrorista, que se descalifica por sí mismo al utilizar el chantaje como método político y la amenaza sobre las vidas de inocentes como instrumento para llevar a cabo estos objetivos, ni caeremos tampoco en la trampa de discutir los objetivos políticos que los responsables de ETA político-militar parecen plantearse al hacer esta amenaza.

ETA político-militar, como todos ustedes saben, como Sus Señorías conocen, pretende distinguir sus acciones de terror y de chantaje de las de la otra rama de la ETA, por aquello de que en algún momento de su historia han aceptado lo que ellos califican de vía institucional o del Estatuto. Y es bueno, es conveniente, que nosotros digamos desde aquí, en este momento, que en una democracia y en un Estado de Derecho las cosas no se distinguen tan sólo por los objetivos que se pretenden, se distinguen por los instrumentos que se utilizan, y que para nosotros los Socialistas y para esta Cámara, según entiendo yo, en su abrumadora mayoría, es tan condenable o más condenable utilizar el chantaje, la amenaza o el terror, aun cuando se defiende una vía institucional, como puede ser el desarrollo del Estatuto, como cuando se definen y defienden otros objetivos, como puede ser la independencia pura y simplemente.

Nosotros, al plantear esta proposición no de ley, tan sólo deseamos que se dé una respuesta institucional, clara y contundente, que ponga de manifiesto la exigencia al Gobierno y el apoyo de esta Cámara al Estado, en lo que se refiere a cualquier negativa a aceptar la negociación en cualquier circuns-

tancia y posibilidad que quieran plantear los terroristas, y también en lo que se refiere a cualquier política de respuesta contundente y de ataque a estos métodos que un sistema democrático no debe tolerar. Y ello lo hacemos tan sólo por decencia y respeto a lo que es nuestro sistema de Gobierno, que no es otra cosa que la democracia.

Señoras y señores Diputados, de la historia reciente del País Vasco puede decirse con toda justicia que está escrita con sangre, sudor y lágrimas. Yo dije en mi anterior intervención que seguramente de que los rumbos del País Vasco no fueran por mejores cauces de los que van ahora somos responsables todos los aquí presentes y todos los grupos políticos. Pero debo también aclarar ahora de manera solemne, de manera tajante, que, por lo que se refiere al dramatismo que ha adquirido la historia del País Vasco en épocas recientes, no es culpable el Estado por no entender perfectamente los problemas de la nacionalidad, aunque acaso no los entendamos todo lo bien que debiéramos entenderlos, ni son culpables los grupos políticos que han aceptado las reglas del juego democrático; quienes son fundamentalmente culpables de esto son aquellos que han decidido utilizar el chantaje, la coacción y el terror para obtener objetivos maximalistas; aquellos que están dispuestos a seguir siempre una política vesánica condenable desde cualquier punto de vista.

Pero esta escalada en la violencia que está sufriendo el País Vasco merece hoy una obligada reflexión por lo que significa, no sólo en cuanto que utiliza o trata de utilizar la amenaza sobre víctimas inocentes, sino también por lo que significa, repito, de abrir la herida de enfrentamiento que algunos quieren irresponsablemente jugar entre los pueblos de España. Y esto porque precisamente en esta Cámara y en España se está viviendo una época especialmente difícil respecto de este tema. Porque hay quien quiere jugar en cada instante a enfrentar a unos pueblos del Estado español contra otros; porque hay quien quiere jugar en cada instante a su ventaja política o a conseguir sus objetivos políticos, limitados a una región o a una nacionalidad, olvidando los objetivos del Estado.

Por eso, como vasco y como socialista, debo decir que la amenaza y el chantaje que supo-

nen las acciones de ETA (político-militar) son condenados por la inmensa mayoría del País Vasco con no menos dolor e indignación que lo puedan condenar el resto de los pueblos españoles.

Somos conscientes de que estas acciones suponen un daño grave para multitud de familias humildes que en aquellas zonas en donde el peso específico del sector turístico es importante tienen muchas veces que hacer el presupuesto de todo el año con los ingresos que obtienen de la temporada turística. Somos también conscientes de que lo que está pasando ahora en las zonas turísticas, la amenaza que sobre ellas se cierne es también peligroso para la economía nacional y desprestigia la imagen de nuestro país en Europa y, en general, en todo el mundo. Pero, sobre todo, de lo que somos conscientes, y queremos dejar constancia aquí, es de que estas amenazas suponen una acción cínica y criminal que es inaceptable como método en cualquier país civilizado.

Por todo ello, señoras y señores Diputados, yo no voy ni siquiera a solicitar de Sus Señorías el voto afirmativo para esta proposición no de ley que estoy convencido habrá de ser abrumadoramente mayoritaria; tan sólo quiero decirles que si este Congreso —como es de suponer— se define claramente en este tema con la oportunidad que nos da el momento de hacer una respuesta inmediata a la táctica de chantaje y coacción de ETA (político-militar), habremos dado un paso adelante en la lucha contra el terrorismo en este país. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en relación con esta proposición no de ley? (Pausa.)

Grupo Andalucista, Grupo Mixto, Coalición Democrática, Socialista del Congreso, Grupo Comunista y Grupo Centrista.

Como saben, cada uno de los Grupos Parlamentarios dispondrá de cinco minutos para fijar su posición en relación con esta proposición no de ley. El Grupo Parlamentario enmendante, puesto que nada más se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, utilizará ese mismo tiempo a efectos de defender el planteamiento alternativo que hace en relación con esta moción.

Por el Grupo Parlamentario Andalucista tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, una vez más subimos a esta tribuna para hablar de un tema que tiene relación, en alguna medida, con Andalucía, que tiene alguna relación con el pueblo andaluz, y siempre —desgraciadamente, en este caso mucho peor— por motivos que son ingratos, como todas Sus Señorías estarán de acuerdo.

Hoy ETA político-militar se convierte en el aliado más perfecto de las fuerzas más reaccionarias y negras que tiene este país en dos aspectos: tanto en el caso del subdesarrollo del pueblo andaluz —al igual que de otros pueblos de España— como en el propio caso de la desestabilización de la democracia.

ETA político-militar, en su esquizofrenia mental, pretende forzar al Gobierno mediante el empobrecimiento, entre otros, del pueblo andaluz; pretende conseguir una amnistía reforzando los barrotes de las cárceles de la pobreza del pueblo andaluz. ETA político-militar se alía con todos aquellos que claman contra el sistema democrático y se convierte en el fiel canchero de los intereses de la reacción, de los intereses más reaccionarios de este país, fabricando, en alguna medida, la llave con la cual se puede dar un nuevo cerrojo a nuestro proceso democrático.

ETA político-militar, hoy, con su actuación, alienta y da ánimos a la reacción, tanto a la hora de desacreditar el sistema democrático como a la hora de pedir —como alguna vez se ha podido oír— la anulación de uno de los logros más importantes de nuestra naciente democracia, como es la anulación de la pena de muerte.

Un problema de tal envergadura, al igual que otros problemas que hay en España, nosotros creemos que se debe afrontar entre todos, pero generando en alguna medida eficacia y entusiasmo, y para ello es importante tener credibilidad y firmeza. No sólo es una labor de Gobierno, pero es fundamentalmente una labor de Gobierno.

Evidentemente, el Ejecutivo debe tener la colaboración y la solidaridad, en temas de

este tipo, de los Grupos Parlamentarios —y así lo va a tener este Gobierno y cualquier otro de nuestro Grupo Parlamentario— en tres aspectos: el primer aspecto, posibilitar la legislación necesaria para enfrentarse contra el terrorismo; el segundo, posibilitar una acción global de Gobierno en las condiciones concretas en que nos encontramos, sin llevar las específicas demandas de nuestro propio Grupo Parlamentario al terreno de la utopía o demagogia, que pone en peligro esa propia acción de Gobierno, y, en tercer lugar, colaborar a crear un clima social que aísle cualquier tipo de terrorismo y que posibilite la lucha contra él, clima social que responda en alguna medida a la solidaridad que, en algún aspecto, nos demandan las propias Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Ejecutivo es una pieza fundamental de esta lucha para erradicar de alguna forma el terrorismo, pero creemos que el Gobierno debe tener, debe intentar poseer otra vez los propios niveles de credibilidad que tuvo en épocas recientes en un tema que tiene que ver con el terrorismo, como es el tema autonómico.

No podemos concebir ninguna acción ni solución que sea en profundidad y de futuro sin tener unas mínimas cotas de credibilidad en un sistema democrático. Sin credibilidad, muchas veces acciones positivas y loables se pueden convertir en estériles. Credibilidad que se puede recuperar tanto en la acción en otras determinadas zonas de España como en la propia zona en la cual está erradicado, fundamentalmente, el problema de llenar de contenido un Estatuto vasco o las propias competencias de un Gobierno vasco. Pero nosotros nos preguntamos —y tenemos que hacer una reflexión— si en este momento el Ejecutivo, con las fuerzas que le soportan, está capacitado, es idóneo para enfrentarse realmente y en profundidad con este problema, aunque goce en este momento y en este tema puntual del apoyo de las fuerzas políticas, en concreto de nuestra fuerza política.

Pero hay que hacer también una llamada de responsabilidad al Gobierno de Euskadi, del Gobierno vasco. Los dos gobiernos tienen la obligación de entenderse para enfrentarse, en sus respectivas competencias, con el problema del terrorismo. El poder conlleva a ve-

ces, y en los momentos actuales, impopularidad; impopularidad que también conlleva la oposición si somos responsables; impopularidad a la que hizo referencia, en otro contexto diferente, una voz más autorizada en este Congreso: la del señor Lavilla. Hoy los políticos tenemos, en gran medida, que ser impopulares a corto plazo; si no, seremos efímeramente populares para convertirnos en perpetuamente impopulares.

De ahí nuestra llamada al Gobierno vasco, de ahí el decirles a los compañeros vascos si creen, si realmente el Gobierno de Euskadi cree que el recorte más o menos importante, por ejemplo, de los conciertos económicos, o de otras facetas, en alguna medida justifican acciones de este tipo las actitudes que a veces adopta el Gobierno vasco o el propio partido que lo sustenta.

Desde Andalucía somos conscientes de la problemática del País Vasco y somos conscientes de nuestra propia problemática; pero desde aquí le tenemos que decir a ese Gobierno vasco y al propio partido que lo sustenta que a veces no se trata simplemente de no perder terreno electoral. El poder y el Gobierno conllevan a veces no ganar elecciones, sino gobernar, aunque eso sea duro en momentos como los actuales. Entre todos debemos prestar nuestra colaboración a esa labor, porque entendemos que es la única forma de erradicar la posibilidad de que exista la más mínima argumentación del propio terrorismo. Hay que superar entre todas las situaciones como esa en la que se encuentra la propia Ley Orgánica de Policías Autónomas. Si responsabilidad, evidentemente, tiene el Gobierno vasco, nosotros creemos que responsabilidad también tiene, como hemos dicho antes, el Gobierno español, que debe generar de alguna forma entusiasmo y eficacia en el pleno sentido de la propia palabra.

Creo que se debe erradicar cualquier forma de terrorismo, aunque hoy estemos hablando, como he dicho antes, de algo que afecta fundamentalmente —como he dicho antes— al pueblo andaluz. Pero la única manera de erradicar cualquier forma de terrorismo es que se vea una clara voluntad democrática de enfrentarse nítidamente con cualquier acción violenta que se oponga al propio sistema. Un dato de esa voluntad es que si-

tuemos en los puestos de responsabilidad de la propia Administración pública, o de la propia Administración judicial o policial, a personas beligerantes, a personas con actitudes absolutamente beligerantes con cualquiera de las agresiones que sufre el sistema democrático.

El Gobierno, a través de resortes que están en sus manos, debe conseguir calar en el consciente y en el subconsciente de todos los españoles que la situación democrática es irreversible, porque, a pesar de todo, la democracia es el más fuerte de todos los sistemas, por mucho que les pese a algunos nostálgicos del autoritarismo; debe calar en la conciencia de los pueblos de España que todas las soluciones a la violencia, al terrorismo, pasan por el mantenimiento del propio sistema democrático. Así estaremos desactivando una de las consecuencias del terrorismo de ETA (político-militar), que es una posible involución. Pero, a la vez, al Gobierno le pedimos eficacia en su sentido más pleno y que sea capaz de transmitir esa propia sensación de eficacia a la propia sociedad. Le pedimos, evidentemente, que haga lo posible, solamente eso; en nuestra responsabilidad, trataremos también de hacer lo posible.

Por último, y para acabar, quisiera resaltar dos aspectos que quizá fueran interesantes para el propio Gobierno y para el propio Ministro del Interior. Hay un dato, y es que una de las formas sistemáticas que tiene ETA (político-militar) de presionar al Gobierno es a través de acciones que ponen en peligro una de las industrias más importantes de España, que es la del turismo. Si ETA (político-militar) es verdad que tiene financiaciones del exterior, habría que buscar las conexiones con países que se pudieran beneficiar de esa situación creada en nuestro país, que con situaciones de ventaja en otros países.

Igualmente, recordar también al señor Ministro la precaria situación policial en que se encontraba el verano pasado, por ejemplo, una zona como la Costa del Sol, reconocida dentro de las propias organizaciones de seguridad del Estado. Había veces en que se daba la circunstancia de que un solo policía tenía que estar desde las ocho horas de la mañana hasta las ocho de la mañana siguiente, o sea, veinticuatro horas, para revisar

los aviones que llegaban. Simplemente una llamada a que se intensifiquen —como sabemos que en alguna medida se está haciendo ahora— medidas en zonas como la Costa del Sol, Valencia o cualquier otra zona de las que hoy están en peligro.

Por todos estos motivos, nosotros votaremos sí a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por considerar que estamos ante un problema que nos afecta a todos. Nosotros trataremos, en la medida de nuestras fuerzas, de colaborar en la lucha de lo que supone este nuevo azote de España y que hoy se concreta en el pueblo andaluz. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario da su pleno apoyo a la proposición no de ley formulada por los Grupos Socialistas del Congreso, y también porque entiende que mejora la redacción final de la enmienda presentada por el Grupo Comunista.

Realmente habría muy poco más que añadir, porque es obvio que cualquier Grupo de esta Cámara y cualquiera que se sienta español, cualquier persona que se sienta humana, civilizada, al servicio de la comunidad, respetuosa de la moral natural y del Derecho, ha de dar ciertamente su apoyo a la proposición no de ley que está en debate, por sus propios fundamentos y por la elemental consideración de que toda actitud diferente sería aceptar la disolución del Estado y del Derecho.

Nosotros ciertamente hemos dicho siempre lo mismo: que la seguridad ciudadana, interior y exterior, es la primera función del Estado; que contra quienes practican la guerra revolucionaria contra la paz civil y el orden constitucional, todos los medios al alcance de los poderes públicos son lícitos y de uso urgente; que la escalada del terrorismo no se resolverá con nuevas claudicaciones o debilidades, y que, en fin, se trata de algo muy sencillo: o ellos o España.

Por supuesto, el hecho de que en este momento de problemas exteriores el prestigio

de España sea atacado, en este momento de dificultades económicas que sea el tendón de Aquiles de la balanza de pagos el que se quiera herir y que en este momento de paro y de dificultades de las empresas se produzca la agresión contra los más modestos, las pequeñas y medianas empresas del turismo, y los trabajadores, muchas veces temporales, de las zonas menos desarrolladas, merece una especial constancia en acta. Me parece juicio suficiente para los que desprecian las vidas de las posibles víctimas, el prestigio y el bienestar de España, la suerte de las regiones y grupos sociales menos favorecidos. Todo ello caerá, en inevitable Némesis histórica, sobre los que así desprecian a la nación española, a sus ciudadanos y a las reglas más elementales del juego civilizado.

Repito, la opción es clara: o ellos o España.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bandrés.

El señor BANDRES MOLET: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, por cortesía de mis compañeros del Grupo Mixto hablaré exclusivamente en nombre del partido político Euskadiko Ezkerra. En tal representación, quiero hacer una primera afirmación, que debe quedar clara: Euskadiko Ezkerra rechaza actuaciones como la que origina este debate y lo afirmamos terminantemente, sin ninguna ambigüedad.

Como yo tuve ocasión de manifestar en situación bien triste y lamentable, hace aproximadamente un año, el mejor procedimiento para que no exploten bombas es no ponerlas, y hoy no tendría que retirar ninguna de aquellas palabras. Pero olvidar las causas profundas, las causas políticas que determinan este tipo de actuaciones, desde luego desmesuradas, sería un gran error político en el que esta Cámara no debe incurrir.

Los hechos, señores Diputados, nunca ocurren en una campana neumática en la que se ha hecho el vacío; los hechos, por execrables que sean, ocurren en un contexto histórico, en una realidad, y estos hechos se producen en la España del día de hoy. Hoy, tengo que decirlo con pena, asistimos a una

involución en las relaciones Euzkadi-Poder central.

El Partido Nacionalista Vasco ha abandonado las instituciones estatales. Nosotros no compartimos su actitud. Ahí he estado yo, en mi escaño, solo, en perfecta soledad, muchas veces pasándolo muy mal, como único representante del nacionalismo vasco de derechas o de izquierdas, tratando de mostrar con mi presencia y con mi voto nuestra vocación democrática, trabajando aquí en la democracia. Y, sobre todo, tratando de mostrar con mi presencia la solidaridad de la izquierda abertzale con el resto de los pueblos del Estado y con todo el pueblo trabajador de España. Pero el PNV tiene responsabilidades de Gobierno que yo no tengo, y algo grave está pasando para que un partido conservador, un partido de vocación institucional, hoy no permanezca, hoy no esté aquí con nosotros y haga ya muchos meses que está ausente de sus escaños.

Yo siento decir que hoy todavía aquí en España la tortura indagatoria persiste. Yo he visto sus huellas recientemente en el cuerpo de Santiago Suárez y lo ha visto el médico forense, y el juez, si hubiera querido, también. Esto, señor Ministro, no es una campaña orquestada, ni mucho menos orquestada por mí. Yo, siendo Senador, tuve en el Senado la satisfacción enorme de decir: «Hoy ya no existen malos tratos en las comisarias de Guipúzcoa». Y hoy ya no puedo decir lo mismo, y lo siento profundamente, porque quisiera hacer hoy esa misma proclamación aquí.

El señor Ministro del Interior amenaza en su discurso no sólo a los que militan en organizaciones armadas, sino a todos los que no nos plegamos a ese maniqueo planteamiento que ya hicieron sus antecesores: conmigo, con mi política de orden público o con el terrorismo. Señor Ministro, se puede no estar con usted, no estar con su política de orden público y no estar, además, con el terrorismo; al menos este es mi caso.

Los Gobernadores Civiles en el País Vasco están anulando acuerdos municipales democráticos, aunque luego, a veces, los tribunales den la razón a los Ayuntamientos.

Por tomar un caso anecdótico reciente, el Alcalde de Isasondo ha sido agredido recientemente por las Fuerzas de Orden Público por

defender simplemente un cartel que anunciaba algo antinuclear.

La cárcel de Soria, señores del Gobierno, ha sido allanada recientemente, y no por primera vez, por las Fuerzas de Orden Público y los presos brutalmente maltratados. Habrá más de una interpelación en este Parlamento sobre este tema; ya se tratará de ello. En cualquier país democrático del mundo el Director de la cárcel de Soria, el responsable de esa entrada en la prisión, estaría hoy destituido. Pero aquí el Gobierno no se adelanta a solucionar ese problema y tienen que venir a pedirnoslo con bombas. Esto es tremendo y es lamentable.

El mecanismo constitucional y estatutario que permitiría conocer la voluntad democrática del pueblo navarro permanece paralizado, y aquí la responsabilidad no es sólo del Gobierno y de su partido, también cabe responsabilizar al Partido Socialista Obrero Español, y hace falta que venga alguien a pedirnos esto por la violencia, y esto es lamentable. (Rumores.)

Señores Diputados, hoy siguen en la cárcel, después de aprobado el Estatuto de Autonomía de Guernica, hombres que han luchado por la autonomía. Yo sé que esto no es agradable, pero, señores de la derecha, yo no he venido a decir lo que ustedes quieren oír, sino lo que yo pienso, como lo piensan mis electores, y tendrán que soportarme y les ruego que tengan esa atención.

Yo sé que es impopular pedir aquí medidas de gracia, pero yo sé que es uno de los medios por los que pasa la pacificación y la solución del problema de Euzkadi, y por ello no puedo callarme, porque mi conciencia está por encima de la conveniencia, y no me cansaré de pedir las, como seguiré pidiendo, siempre que tenga un micrófono al alcance, medidas políticas para Euzkadi, medidas políticas y soluciones políticas para problemas profundamente políticos.

Yo termino con lo que he comenzado: rechazo la acción de ETA político-militar; yo no estoy en absoluto de acuerdo, ni mi partido, con tal acción, pero tengo también que decir que no voy a poder aportar, y lo siento, mi asentimiento a esta moción o proposición no de ley. Lo hago simplemente por lo siguiente: la moción dice que se tomen todas

las medidas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, para atajar la acción terrorista con toda la decisión y contundencia que las leyes permiten. Hoy, señores de la izquierda, aquí, en España, las leyes permiten que se prorrogue la detención durante diez días, privados los detenidos del derecho constitucional a ser asistidos por un abogado desde el momento de su detención. Ustedes y yo votamos contra eso en aquel día, y ese decreto-ley pasó por esta Cámara con un mínimo, con un voto, si no recuerdo mal, solamente de diferencia. Yo no puedo votarlo porque yo soy un jurista, porque tengo una conciencia política y una conciencia personal que me impiden permitir que esto ocurra; porque sé perfectamente lo que hay detrás de eso, lo sé perfectamente, insisto, y por eso es por lo que me abstendré en la votación de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo ha defendido esta mañana en la Junta de Portavoces la incorporación al debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Y la ha defendido porque es consciente de la gravedad del problema, de las implicaciones que el mismo tiene y de la importancia de una decisión de este Parlamento, justo en el momento en que esta decisión es requerida.

Yo no voy a justificar nuestra posición, no voy a justificar el porqué de nuestro sí al problema general, porque creo que nuestro Grupo ha planteado en diversas ocasiones, con toda claridad, cuál es su posición ante el tema del terrorismo. Y lo hemos hecho aquí y fuera de aquí; lo hemos hecho en Madrid y en Cataluña y lo hemos hecho, sobre todo, arrojando todas las consecuencias políticas que ello conllevaba, en Euzkadi. Y precisamente porque lo hemos hecho en todo momento, consideramos que éste es un problema que hay que abordar con toda urgencia y hay que abordarlo en sus aspectos policiales y en sus aspectos, sobre todo, políticos.

Nosotros consideramos que, efectivamen-

te, hoy es una grave tarea del Gobierno combatir el terrorismo, pero es necesario arbitrar las soluciones políticas necesarias para ello, y en ese sentido consideramos que es hora de que se adopten las medidas de aceleración de trasposos, a este respecto, al Gobierno Vasco. Sin embargo, pensamos que el tema que se ha planteado con la ofensiva terrorista de ETA político-militar tiene una especial urgencia y gravedad, y de ahí nuestro acuerdo sustancial y de ahí, también, el sentido de nuestra enmienda.

Pensamos que es especialmente importante por tres razones: primero, porque, como ya se ha dicho por otros Grupos que han intervenido desde esta misma tribuna, incide en una situación económica y social extraordinariamente delicada y afecta gravemente a intereses muy importantes de sectores de la pequeña empresa y de los trabajadores, en situación ya grave de por sí por la situación de paro. En ese sentido, pensamos que es una tarea urgente intentar luchar contra esa nueva calamidad que se abate sobre el pueblo trabajador.

En segundo lugar, hay una razón que es enormemente importante y delicada, pero que nosotros queremos abordar. Una acción como ésta hace correr el riesgo de desplazar el centro de gravedad del problema, provocando lo que en ningún momento debemos permitir que se produzca, es decir, enfrentamientos entre pueblos, y es evidente que una acción de este tipo puede generar entre pueblos distintos de España un sentimiento antivasco que nosotros consideramos necesario evitar. A este respecto, a nosotros nos gustaría que estuviesen presentes en esta Cámara los Diputados del Partido Nacionalista Vasco, para que con su acción política contribuyesen, precisamente, a desvanecer esta falsa imagen. Por eso nos parece también enormemente importante que las cosas queden claras al respecto.

En tercer lugar, nos parece importante también apoyar esta moción porque las acciones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas, y hay una situación de desmoralización, una sensación de impotencia ante una acción de estas características, que yo sé que no se va a atajar por el hecho de que nosotros hagamos una proclamación solemne, pero

que, desde luego, puede contribuir esta proclamación solemne a crear unas condiciones mejores para enfrentarse colectivamente con el problema.

Y voy al sentido de nuestra enmienda. Nuestra enmienda no pretende introducir ningún elemento sustancialmente nuevo; pretende, pura y simplemente, aportar lo que, a nuestro entender, es una mejor redacción de la última parte, es decir, de lo que se puede entender propiamente por la moción en sí misma.

La moción ahora plantada dice: «Requiere al Gobierno, a todas las autoridades, a todos los ciudadanos, para que tomen todas las medidas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, para atajar la acción terrorista con toda la decisión y contundencia que las leyes permiten».

Nuestra enmienda mantiene la primera parte de esta moción, pero con una modificación que voy a señalar inmediatamente. Dice lo siguiente: «Requiere al Gobierno, y a todas las autoridades, para que tomen las medidas pertinentes», etcétera, etcétera; todo igual, y aquí quiero indicar el cambio significativo, y es que hemos suprimido la palabra «ciudadanos», que la colocamos más adelante. En consecuencia, le añadimos, además, una finalidad concreta; es decir, precisar más exactamente el fin de esta política que pedimos al Gobierno.

En consecuencia, la moción diría lo siguiente: «Requiere al Gobierno y a todas las autoridades, para que tomen las medidas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, para atajar la acción terrorista con toda la decisión y contundencia que las leyes permiten, con el fin de hacer posible la convivencia pacífica entre todos los españoles y el pleno ejercicio de las libertades públicas, tanto colectivas como individuales».

Este aspecto finalista nos parece extraordinariamente importante para que no se produzcan equívocos. Y añadimos luego: «El Congreso de los Diputados insta a todos los ciudadanos a pronunciarse activamente por la consecución de estos objetivos, como garantía indispensable para el pleno funcionamiento de nuestra sociedad democrática».

Nos ha parecido que pedir simplemente a todos los ciudadanos que tomen todas las

medidas pertinentes, tanto a nivel interno como internacional, se podía prestar a una interpretación equívoca, y es lo menos que puede decirse, del sentido profundo de esta moción, sentido que nosotros —insisto— compartimos plenamente.

Este es el sentido de nuestra enmienda, que se coloca plenamente en el objetivo perseguido por el Grupo proponente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista del Congreso es firmante de la proposición no de ley y, por consiguiente, asume absolutamente los motivos expresados por el Grupo Socialista Vasco en cuanto a su defensa inicial.

Nos ha parecido importante que, dentro de los Grupos Parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español fuese un representante del Grupo Parlamentario Socialista Vasco quien hiciera la intervención de defensa, porque, como ya se ha dicho aquí en algún momento, por los hechos que aquí estamos debatiendo podría generarse una situación de enfrentamientos entre pueblos, y nosotros sabemos (porque los socialistas vascos aquí presentes son testimonio de ello, como otros vascos, también aquí presentes, lo han demostrado hoy) que los vascos reprobaban ese tipo de acciones, que los vascos son un pueblo pacífico, que los vascos, en su mayoría, no están a favor de las acciones de ETA político-militar. Por consiguiente, ése ha sido el sentido fundamental de nuestra defensa inicial, por parte del Grupo Parlamentario Socialista Vasco.

Quisiera, en nombre de mi Grupo Parlamentario, hacer algunas observaciones complementarias en este debate, que me parece muy importante porque, al hilo de un hecho concreto, desgraciado y muy grave, como ya se ha dicho, para determinados intereses, no solamente intereses económicos, con ser de por sí enormemente respetables e importantes, sino para intereses personales muy fundamentales de muchos ciudadanos, y también para intereses de regiones importantes en

nuestro país, este tema se sitúa en el centro de la problemática del Estado y de la problemática de la sociedad en el mundo moderno.

Nosotros hemos dicho, en muchas ocasiones, que, con todos los inconvenientes y con todos los defectos que existen, no aceptamos que el uso de la violencia se practique por medios privados; que si alguien justifica o acepta cualquier tipo de violencia privada, estamos dando pasos atrás de docenas o de centenares de años en la historia de la humanidad; que el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, racionalizada a través del Derecho, es uno de los progresos más importantes de la historia de la cultura y que, por consiguiente, nosotros nos insertamos en ese ámbito.

Nosotros, que en muchas ocasiones hemos hecho críticas, hemos establecido controles, hemos sido los que hemos propiciado la creación de la Comisión sobre presuntos malos tratos a presos en el País Vasco, estamos dispuestos a controlar al Gobierno en todo lo que suponga a nuestro juicio exceso de funcionarios o acciones que desmerezcan de la corrección jurídica necesaria; pero eso se puede hacer dentro del respeto a las reglas democráticas de juego de un Estado de derecho, y eso se encuentra protegido por nuestra Constitución.

Por consiguiente, no deben mezclarse, a nuestro juicio, esas afirmaciones con cualquier tipo de justificación o de explicación del uso de la violencia privada —que nadie ha hecho aquí hoy, tengo que decirlo—, pero que de todas maneras es importante que quede muy clara esta posición de los socialistas. En algunas ocasiones los socialistas hemos hecho requerimientos o planteamientos sobre otras violencias privadas y hemos tenido que lamentar que algunos Grupos Parlamentarios hayan querido apostillar diciendo que solamente nos preocupábamos de determinada violencia. Recuerdo que, recientemente, ante nuestra preocupación por hechos de violencia de extrema derecha y ante determinadas preguntas, algunos Grupos Parlamentarios se vieron obligados a hacer una filosofía general de la violencia diciendo que también había violencia de extrema izquierda. Nosotros aquí hemos hecho un planteamiento, en este caso, respecto a una

violencia concreta. Estamos muy contentos de que esos Grupos Parlamentarios —me refiero en concreto a Coalición Democrática, que fue quien hizo esa filosofía general en aquella ocasión—, no haya considerado necesario hacer una filosofía general en este momento, lo cual supone que se ha venido a nuestra tesis de que hay que tratar a cada caso concreto en su momento concreto y no generalizar siempre las violencias de un lado o de otro.

Quisiera también decir que el tema del País Vasco, la problemática del País Vasco, exige efectivamente soluciones políticas, exige controles para hechos indignantes, como se han podido señalar aquí algunos de ellos. Tengo que decir a algunos de los compañeros de la Cámara que es muy importante, que nosotros creemos que uno de los tesoros inapreciables que tenemos aquí es que tengamos que oír cosas que no nos gusten, como se ha dicho en determinadas materias; y eso es inapreciable. Yo valoro, nuestro Grupo Parlamentario también valora en esta materia mucho más la presencia del Diputado señor Bandrés, que la ausencia del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Creemos que el análisis de los problemas que afectan a la libertad, a la democracia y a la violencia, que están planteados en torno a hechos tan graves como los que se suscitan con esta proposición no de ley que nosotros defendemos, debe hacerse desde la lealtad al Estado. Nosotros consideramos que las ausencias en el Parlamento no están justificadas, que no existe ninguna razón para ausencias permanentes; que no existe ninguna justificación para ningún tipo de chantajes sobre el Gobierno, sobre ningún Grupo Parlamentario, sobre la ausencia o la presencia en el Parlamento; y que mucho menos existe ninguna justificación para deslealtades a un Estado democrático que tiene unas reglas que permiten que todos jueguen en el interior de las mismas.

Desde este punto de vista también creemos —y pensamos que esta es una buena ocasión para decirlo—, que nuestra Constitución es uno de los elementos estables de nuestra democracia; creemos que cualquier modificación de nuestra Constitución puede abrir intentos de otras modificaciones y que eso no es bueno. Los intereses generales deben pri-

mar sobre cualquier problema específico que se plantee en esa materia.

Para terminar, señor Presidente, señoras y señores Diputados, hay dos perspectivas que nos sorprenden en relación con este tema. En primer lugar, el hecho de que en los medios de comunicación del Estado no se haya advertido o informado a nuestro pueblo, que es un pueblo mayor de edad, de la gravedad de la situación en esta materia; creemos que es errónea la filosofía que sostiene que eso es hacer apología del terrorismo; creemos que el pueblo español debe estar informado de todo lo que sucede, que no se deben ocultar los problemas, como se ha hecho en tantos otros casos, por televisión.

Por otra parte, también nos sorprende, porque nuestras noticias no coinciden con algunas que se han dado en la prensa, que se haya mantenido el equívoco de que la famosa bomba de Fuengirola es una bomba de un kilo de goma-2, cuando, según nuestros conocimientos, no es más que un importante petardo que ha explotado. Si eso es cierto, si es sólo un importante petardo y no un kilo de goma-2, no podemos tampoco entender cómo no se ha desmentido esa afirmación, porque eso es crear desasosiego y desconcierto en nuestro pueblo; eso sí que es hacer eco al terrorismo y no informar objetivamente del tema en televisión.

Se ha hablado de los daños a los trabajadores, a las empresas, a los ciudadanos, al turismo. Se ha hablado, y nosotros insistimos en ello, del servicio que con estas acciones se hace a los intereses turísticos y económicos de otros países extranjeros.

No tenemos nada más que decir, sino que, como creemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista mejora la redacción del último punto de nuestra proposición no de ley, el Grupo Socialista la acepta, dejando muy claro, porque quizá haya una equivocación en la redacción, que el conjunto es la proposición no de ley; es decir, que lo único que hace el Grupo Comunista es sustituir el último punto desde «por tanto, requiere al Gobierno...» por un texto nuevo; no es, por tanto, una moción, sino una parte de la proposición.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Jiménez Blanco.

El señor JIMENEZ BLANCO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, esta mañana, día 24 de junio, con la serenidad indignada que la amenaza salvaje de ETA político-militar nos provocaba a todos, la Junta de Portavoces ha tenido la satisfacción de dar su conformidad a la tramitación de urgencia de la muy oportuna proposición no de ley —lo digo en el más noble sentido de la palabra—, que los Grupos Socialistas han planteado, tanto en los términos de su justificación, como en su conclusión, que se modifica ahora —con confirmidad, por supuesto, por nuestra parte—, con el nuevo texto que presenta, como enmienda, el Grupo Parlamentario Comunista.

El Grupo Parlamentario Centrista va a votar con gran satisfacción esta proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialistas, con la modificación introducida por el Comunista.

Yo quería, sin embargo, matizar, por ejemplo, en la intervención del señor Solchaga, cuando decía que planteaba su petición como una petición institucional, y en esto estamos de acuerdo, naturalmente; pero cuando distinguía exigencia al Gobierno y apoyo al Estado, naturalmente el Grupo Parlamentario Centrista estima que es exigencia y apoyo al Gobierno y al Estado, porque ese es el juego que en la Constitución existe con respecto a la relación entre uno y otro concepto, y porque eso es así.

El voto a favor del Grupo Parlamentario Centrista sólo tiene en el contexto general la nube de que el señor Bandrés nos ha denunciado que se va a abstener. Yo lo siento en lo personal por razones que el señor Bandrés sabe perfectamente. Creo que el día que el señor Bandrés vote a favor de una proposición no de ley como ésta —aparte de la condena al terrorismo que ha hecho, ya que, evidentemente, creo en su sinceridad—; el día que sea capaz de votar a favor de este tipo de proposiciones no de ley, será cuando, verdaderamente una acción política real empiece a ser algo más, una luz para que acabe definitivamente este problema terrorista.

Por otra parte, los hechos son bastante claros y tengo obligación, en cuanto represento al Grupo que apoya al Gobierno, de explicarlos.

El día 21, sábado, en Londres, se presentó un mensaje en la oficina de una agencia de Prensa. Inmediatamente, el mismo día exactamente, la Secretaría de Estado para la Información dio un comunicado que decía: «Conocido el intento de acción terrorista de ETA político-militar en las zonas turísticas españolas, el Gobierno decidió, en primer lugar no considerar en ningún caso la posibilidad de establecer negociaciones. El Gobierno no aceptará de forma rotunda ninguna de las pretensiones que ETA político-militar hizo públicas». Esta declaración se hizo el mismo día 21, muy poco después de conocerse el depósito del mensaje en la agencia londinense «Associated Press», por parte de la Secretaría de Estado para la Información y como comunicado del Gobierno. Inmediatamente después empezó la actuación por parte del Ministerio del Interior.

El pasado 21, el Ministro del Interior se reunió con los Directores de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para establecer las líneas generales de actuación, a partir de los primeros datos obtenidos, y mantuvo contactos desde entonces con los Gobernadores Civiles de las zonas afectadas. El domingo 22, se reunió con el Ministro de Comercio y Turismo y con el Secretario de Estado de Turismo para ver la posible incidencia en las zonas a las que se refería el mensaje de ETA político-militar; las actuaciones, definición de objetivos, determinación de áreas de responsabilidad y fijación de la coordinación en la actuación. Se puso en marcha la operación de traslado de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para posibilitar los servicios especiales que se ponían en marcha y que afectaban a los diversos Cuerpos de la Seguridad Nacional.

Por otra parte, con todo ello, el Gobierno estima —con declaraciones que ha hecho, de las cuales hablaremos después— que, dentro de lo que cabe en estos tiempos, está en los límites máximos para garantizar la seguridad de personas y bienes en este tema. En todo caso, y en este punto es donde habría una

cierta aclaración que hacer con respecto a la distinción planteada por la proposición, cambiada en este punto por el Grupo Comunista, se cuenta con la colaboración ciudadana y se ha elaborado un plan de autoprotección para desarrollar en establecimientos hoteleros que se pondrá en conocimiento de los empleados y empresarios.

El trabajo, por tanto, por parte del Gobierno; el esfuerzo; las detenciones realizadas con sujeción estricta a la ley; las acciones de coordinación; el desplazamiento de efectivos, todo ha sido realizado conforme a la ley, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico para la mayor eficacia de la acción gubernamental.

Con respecto al tema de la información, conoce perfectamente el señor Peces-Barba que el problema del hecho informativo del terrorismo es un problema planteado a todos los niveles. En relación con este tema habría bastante de qué hablar. Es necesario, sin duda, una cierta dosis de información sobre el delito y la violencia en general para mantener despiertos a los ciudadanos de un país, para inmunizarlos en un sentido o en otro y para permitirles que sigan confiando en la Justicia y en el orden. Pero el problema surge cuando se considera el cómo y el cuánto de dicha información. La información sobre las actividades delictivas o antisociales opera como un agente de catarsis individual y social. Sin embargo, hay quien opina que una información parca y prudente puede considerarse como una eficacia negativa y multiplicadora que tiene la presentación de la violencia a través de los medios informativos. Es un tema planteado hoy a nivel científico y, por tanto, una declaración contundente sobre el particular tampoco parece razonable en este momento. El pueblo debe estar informado y lo está porque vivimos en un estado de libertad; pero, en todo caso, es un tema profundamente delicado.

Unión de Centro Democrático, el Grupo Parlamentario Centrista, se congratula de esta proposición no de ley, va a votar a favor y desearía que toda la Cámara votara unánimemente, porque estima que es una prueba de solidaridad y de apoyo a la actuación que el Gobierno ha tomado y va a seguir to-

mando en esta materia del terrorismo. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Gobierno tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Rosalón Pérez: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, simplemente para, en nombre del Gobierno, agradecer a todos los Grupos de esta Cámara que han apoyado la proposición no de ley, lo que aquí han manifestado y también, como Ministro del Interior, expresar mi desacuerdo con alguna de las intervenciones.

No son homologables, señoras y señores Diputados, los términos; no es correcto decir que ha habido una actuación excesiva de la Policía Nacional cuando fue necesario introducir, a petición de las autoridades competentes, a la Policía Nacional para reinstaurar el orden en un determinado centro penitenciario. No se puede tampoco, con absoluta libertad y gratuidad, afirmar o hacer afirmaciones sobre malos tratos. Esto hay que dejarlo a la reserva de las circunstancias y de las investigaciones que se realicen.

No puedo estar tampoco de acuerdo con esa afirmación, con esa intervención en lo que pueda tener de coincidencia, aunque sea quizá involuntaria, con dos de los tres puntos planteados en el escrito de ETA político-militar. Señoras y señores Diputados, el Gobierno ha actuado desde el primer momento (como síntesis puedo anunciar que tres mil hombres más están en esas provincias afectadas y no hablo de la repercusión económica de estos desplazamientos ni de la situación en cuanto a la seguridad ciudadana de las provincias de las que han debido ser deducidos); el Gobierno ha estado desde el primer momento en el tema; no va a haber ninguna claudicación; agradece el apoyo institucional que hoy recibe y quizá, parafraseando una de las intervenciones, en nombre del Gobierno yo digo que nosotros optamos por el País Vasco y por España. Optamos por el País Vasco y por España frente a la irracionalidad del crimen de ETA político-militar. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El debate se cierra con la intervención final del proponente

de la moción, al que ruego que, en su caso, determine si decide la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, tal como parece haber anunciado el representante del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, con objeto de poder hacerlo todo, en su caso, objeto de una votación conjunta. Tiene la palabra el señor Solchaga.

El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tan sólo para decir que mi Grupo acepta la modificación propuesta por el Grupo Comunista y que, por consiguiente, podría pasarse directamente a la votación.

El señor PRESIDENTE: Si no hay objeción por parte de ningún Grupo Parlamentario, vamos a someter a votación la proposición con el texto que figura en el escrito de los Grupos Parlamentarios Socialistas, incorporando como párrafo final, que es el contenido específico de la moción, los términos que figuran en la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Comunista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 305; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialistas en relación con la nueva acción terrorista coordinada y dirigida por ETA político-militar en Andalucía y País Valenciano, principalmente. El texto aprobado es el que figura en el escrito de los Grupos Parlamentarios Socialistas, incorporando los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor TRIAS FARGAS: Señor Presidente, pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar al trámite de explicación de voto, señor Trias, puesto que, como sabe, el trámite en el que los Grupos tienen oportunidad de fijar su

posición, se entiende que incorpora la explicación de voto, bien que anticipada.

DICTAMENES DE COMISIONES:

— DE LA COMISION DE TRABAJO, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY BASICA DE EMPLEO. (Continuación).

El señor PRESIDENTE: Proseguimos el debate sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo en relación con la proposición de Ley Básica de Empleo.

En primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 5.º. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Perez Royo. **Artículo 5.º**

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, nuestro voto particular se refiere al artículo 5.º del dictamen que lleva por título el sugestivo y sugerente de «Programas nacionales de empleo». (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, por favor.

El señor PEREZ ROYO: Gracias, señor Presidente.

El sentido de nuestra enmienda, o mejor dicho, de nuestro voto particular, porque es un voto particular de adición, consiste literalmente en añadir a los términos del artículo 5.º, 1, la intervención de los tres niveles o de los tres agentes básicos en la confección de esos programas nacionales de empleo, a saber: el Consejo General del Instituto Nacional de Empleo; el Consejo Económico y Social previsto en el artículo 131 de nuestra Constitución y estas Cortes Generales.

Sustancialmente, nuestra enmienda tiene un sentido implícito precisamente en este sentido literal; un sentido que va más allá del propio tenor literal, tal como acabo de formular. Y precisamente a este sentido implícito nuestro voto particular es al que responde, justamente, el modelo de articulación de la programación que proponemos. Lo que proponemos es, precisamente, un modelo de programación;

buscar un modelo de programación y planificación democrática que se refiera, naturalmente, al tema de empleo como un momento esencial dentro de esa planificación.

Nosotros conocemos, y creo que todo el mundo, la alergia que el Gobierno de UCD siente contra todo lo que signifique planificación, contra todo lo que signifique programación. El plan económico del Gobierno, como se ha dicho muchas veces, yo mismo lo he dicho en esta Cámara, ni es plan, ni es económico, ni es del Gobierno. Es una frase que el señor Abril se conoce que la aprendió para aplicarla a otros planes diversos y con afán de descalificación, y en ese plan económico del Gobierno existe un contrasentido: en una cosa que se llama plan, en un documento que se llama plan repudia, expresamente, cualquier idea de planificación y de programación.

Para nosotros, por el contrario, está muy claro que la idea de programación y la idea de planificación democrática de la economía representa la idea clave para plantear una salida de progreso democrático de la actual crisis. Y con esto entendemos hacer una propuesta que tiene como objetivo no solamente la defensa de los sectores sociales más desfavorecidos, la defensa de sectores sociales más castigados por la crisis a los cuales, principalmente, pretendemos representar, sino también los intereses nacionales, los intereses del conjunto de la nación. Se trata de proponer una política de clases, que por ser así es una política nacional.

Muchas veces se ha especulado sobre el reparto de las fuerzas, a nivel económico, que puede resultar como consecuencia de los ajustes que sobre el papel impone la actual crisis que va a incumbir a la salida de la crisis de la economía española dentro del conjunto de la economía europea, etc. Para nosotros está muy claro que la única manera de que nuestro país y nuestra economía salgan fortalecidos de la crisis es mediante una política que tienda a mantener bajo control social esta idea, que es una idea fundamental para mantener bajo control social los inevitables ajustes que la propia crisis comporta. Es decir, una política de programación democrática que tenga como norte y como test fundamental el empleo, o sea, la creación de empleo.

He hecho esta afirmación o esta serie de afirmaciones para recalcar el marco dentro del cual nosotros entendemos que deben plantearse esos planes nacionales de empleo a que hace referencia el dictamen, y también para que se comprenda cuál es el sentido de la articulación de la programación, de esa programación democrática, la articulación de los agentes o niveles a que debe llevarse esa programación democrática para darle precisamente el sentido cabal que se deriva de nuestras proposiciones anteriores.

Quiero resaltar aquí que la programación democrática, la planificación (mal que le pese al Gobierno, que, como he dicho anteriormente, tiene una cierta alergia a ese tema), es un concepto que se encuentra incorporado en nuestra Constitución; y que se encuentra incorporado, de manera muy singular, en lo que se refiere al empleo.

Yo quiero recordar aquí —aunque creo que no hace falta—, que el artículo 35 de nuestra Constitución dice que todo español tiene derecho al trabajo y, como se ha recordado hace pocos días en un interesante artículo periodístico, se trata de un derecho armado en el sentido de que el artículo 40, poco después, afirma que los poderes públicos promoverán acciones encaminadas al pleno empleo. Creo que ese es, más o menos, el sentido literal del artículo 40 de nuestra Constitución.

Pues bien, precisamente porque somos defensores de esa idea de programación, tal como hemos indicado anteriormente, y porque entendemos que esta programación debe ser democrática, es por lo que proponemos, como sujeto de esa programación, no solamente al Gobierno, como aparece en el artículo 5.º del dictamen, sino que proponemos la participación del Consejo General del INEM, el Consejo Económico y Social y las Cortes Generales. ¿Por qué estos tres agentes? La explicación creo que es bastante sencilla y no me voy a extender demasiado en ella.

En primer lugar, la participación del Consejo General del INEM, como forma de hacer participar a los directamente afectados por el problema del empleo que se encuentran representados precisamente en ese Consejo General del INEM; es decir, a las Centrales sindicales y a las patronales. Paso de este punto,

puesto que creo que más adelante, con ocasión del debate sobre esta ley se hablará del problema de la participación de los interesados en el Consejo General del INEM.

En segundo lugar, el Consejo Económico y Social previsto en el artículo 131 de nuestra Constitución, y que aparece conectado con esa idea de planificación democrática sobre la cual insistía anteriormente. En relación a este punto, quiero resaltar —porque nunca está de más recordarlo—, el incumplimiento que, no por frecuente, hay que dejar de denunciar, en que el Gobierno se encuentra en relación a este punto.

Como recordarán Sus Señorías, precisamente con ocasión del debate del Plan Económico del Gobierno, anteriormente citado, se aprobó una resolución en la cual se decía que el Gobierno enviaría con urgencia —no se marcaba plazo, se marcaba el concepto indeterminado de urgencia— un proyecto de ley reguladora del Consejo Económico y Social previsto en el artículo 131 de la Constitución. Hoy, cuando se han cumplido nueve meses, no han mandado todavía ese proyecto de ley, y nosotros aquí denunciábamos una vez más —porque no es la primera vez que lo decimos— ese incumplimiento.

Finalmente, creemos que el último nivel, incluso el nivel decisivo al cual debe plantearse esa programación, son las Cortes Generales. ¿Por qué? Creo que sobran motivos para justificar la participación decisiva de las Cortes Generales en cualquier programación. Esta misma mañana se nos decía por un miembro del partido del Gobierno que si no hay programa para Andalucía es porque la idea de programa o de plan va estrictamente ligada a las Cortes, y las Cortes no han aprobado ese plan.

Pues bien, nosotros decimos ahora que si sacamos las consecuencias de esto, no se puede marginar a la Cortes en cualquier idea de programación, de planificación y menos en estos planes nacionales de empleo. Pero, aparte de los motivos generales que nos mueven a defender las prerrogativas de las Cortes en este punto, existen motivos sobreañadidos en los momentos actuales para reclamar esta participación, por la sistemática actuación de este Gobierno al margen del foro natural para la definición de las líneas de la política económica del país que es, precisamente, el repre-

sentado por esta Cámara junto con el Senado; es decir, por las Cortes Generales.

Ciñéndonos a un campo parcial, pero de excepcional importancia para el empleo, como es el de la construcción, me voy a permitir ilustrar a Sus Señorías con un ejemplo de esa afirmación que he hecho anteriormente. Hace unas semanas se hacía eco la prensa de un Plan nacional de la vivienda, una planificación cuatrienal de la vivienda que el señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo ha presentado a la prensa y a las patronales de la construcción pero que no ha presentado a estas Cortes, teniendo una ocasión privilegiada para hacerlo, puesto que actualmente, ciertamente de manera muy cansina en la Comisión de Obras Públicas de este Congreso estamos discutiendo la Ley Nacional de la Vivienda y vamos a discutir la Ley de Protección Pública a la Vivienda y la Ley de Valoración del Suelo y Rescate de Plusvalías, y ni en la memoria de una y otra ley, ni en los debates ni en los documentos anejos a dichos proyectos de ley se contiene para nada ninguna referencia a ese Plan que, en cambio, se ha presentado fuera de los muros de esta Cámara.

Más datos. Con ocasión de los debates sobre los Presupuestos Generales del Estado, este mismo Diputado que les habla tuvo ocasión de referirse a los Presupuestos del MOPU (del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), y advertir (en un tema que tiene profunda conexión con el problema del empleo, con el problema de estos Planes nacionales de empleo a que estamos ahora haciendo referencia) de los efectos depresivos que sobre la actividad de la construcción (y hay que reparar en que el desempleo en la construcción ocupa el primer renglón del desempleo; actualmente sobrepasa el 20 por ciento de los trabajadores de la construcción en paro) iba a tener el Presupuesto aprobado para el presente año. Argumentando fundamentalmente en función del empleo, proponíamos un incremento sustancial de las dotaciones.

Se nos respondió en aquella ocasión que no eran correctas nuestras afirmaciones, que las dotaciones eran más que suficientes, que eran progresivas y que se iba a producir una reactivación del empleo, precisamente como consecuencia de la actuación de los Presupuestos Generales del Estado. Naturalmente, en es-

te caso la convicción que no supimos tener nosotros la han tenido los hechos. Los hechos son tozudos y actualmente, en esta nota económica del Ministerio de Economía de abril de 1980 se nos reconoce que el descenso en la actividad de la construcción es absolutamente alarmante. El índice de descenso en la licitación privada es del orden del 26,3 por ciento, y como consecuencia de estos hechos —y a esto es a lo que iba a parar— recientemente hemos tenido noticia de que en el último Consejo de Ministros se ha aprobado, después de entrevistas con los empresarios de la patronal, un incremento en las dotaciones al crédito oficial por importe, nada menos, de 50.000 millones de pesetas.

A nosotros no nos parece mal el incremento de esta línea de crédito —al contrario, nos parece bien—, aunque posiblemente hubiéramos defendido otro tipo de política para la construcción, basado fundamentalmente en la promoción pública de viviendas. Pero, en cualquier caso, queremos resaltar que nos parece un mal tipo de política, que nos parece que se realiza un mal servicio a este país, un mal servicio a la democracia y un mal servicio a los procedimientos y a las instituciones básicas sobre las cuales se asienta la democracia cuando el Gobierno hace este tipo de política, hace una política de encargo y recibe encargos de su clientela, cuando había tenido aquí la ocasión de, siguiendo los dictámenes del debate, siguiendo precisamente propuestas hechas dentro de los muros de esta Cámara, tenía aquí la ocasión, repito, de haber corregido una política que era equivocada. La ha corregido ahora y la ha corregido mediante presiones de encargo que en nada benefician a la democracia que todos debemos defender.

Creo que está suficientemente argumentada la proposición de nuestro voto particular referente a los niveles, a los agentes, a los sujetos básicos de la programación. Nuestra idea, y resumo, se centra fundamentalmente en, primero, la idea de planificación y programación democrática como única forma de dirigir correctamente la economía y arreglar correctamente el problema del empleo y, en segundo lugar, en un marco para esa planificación, que no puede quedar de ninguna manera al arbitrio del Gobierno, al arbitrio del Ejecutivo, como se propone en el artículo 5.º del dictamen.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de esta enmienda? (*Pausa.*)

¿El Grupo Centrista desea acumular el turno de defensa del dictamen en relación con las dos enmiendas? (*Asentimiento.*)

Enmienda al número 1 del artículo 5.º del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al número 1 del artículo 5.º va, en cierto modo, en el mismo sentido de la enmienda que ha sido defendida inmediatamente antes por el señor Pérez Royo; es decir, va en el sentido de no dejar en manos del Gobierno la programación de las medidas de fomento del empleo, o de la política de fomento del empleo, y en el sentido de responsabilizar al Parlamento, a las Cámaras, en el control, revisión y definición de esa política.

La situación actual de la cual hay que partir para justificar, creemos nosotros, el sentido de nuestra enmienda es que el Gobierno, por vía reglamentaria, desarrolla sin criterios globales aparentemente explícitos ante el resto de los Grupos Parlamentarios y de la opinión pública, una serie de programas de fomento del empleo para determinados colectivos, algunos con más o menos constatación pública del número de trabajadores que pasan a través de esos programas, o que se benefician en un momento dado, de este programa o de los que podríamos denominar programas más o menos fantasmas que, en un momento determinado, se conoce a través del «Boletín Oficial del Estado» que el Consejo de Ministros ha aprobado, programas que se denominan de empleo para un colectivo, pero cuyos resultados de esos programas después quedan muy oscurecidos, por no decir que no llegan a la opinión pública. Eso sin hablar aquí —creemos que no es el momento, aunque hablaremos a lo largo del debate de esta ley— de otros programas, si se les puede llamar programas de fomento del empleo, para un colectivo específico, como son los fondos de empleo comunitario, con todas las implicaciones que ello tiene.

A pesar de ello, creemos nosotros que el redactor de esta proposición de ley está pen-

sando en ese tipo de programas al hablar de que el Gobierno establecerá periódicamente programas de fomento del empleo. Hay evidentemente otras medidas (algunas de ellas sí que son discutidas en estas Cámaras, por lo menos en el momento de la discusión de los Presupuestos o en otros momentos de los debates parlamentarios) que tienen una relación directa con la política de fomento del empleo, como pueden ser medidas que se refieren a la previsión, planificación y control de la evolución de la mano de obra o de la oferta de fuerza de trabajo; o medidas que se refieren a la formación profesional, sobre lo que hace pocas semanas el Vicepresidente para Asuntos Económicos nos anunciaba grandes esfuerzos y grandes programas para la formación profesional; pueden ser también medidas que se refieren a la escolarización, aunque el Ministro de Educación nos ha hablado de que en el asunto de escolarización está casi todo hecho, y que muchísimas más cosas que no se deberían hacer también las hará el Ministro de Educación; o se habla en otro momento de política de jubilaciones, o de las horas extraordinarias, etcétera.

Además de todo ello, es evidente que lo que más influye en la evolución del empleo no es este tipo de medidas concretas, que son justificables en determinados casos. Lo que más influye son las medidas generales de política económica, y por aquí sí que ha sido debatido el Programa Económico del Gobierno, programa a medio plazo para la economía española, cuyas medidas específicas para solucionar, o intentar paliar, el problema del paro se comprometió el Gobierno, en un debate que se celebró en septiembre del año pasado, a que serían puestas en marcha inmediatamente algunas de ellas, pero sobre las que a la altura del año en que nos encontramos todavía no ha sido gastada ni una sola peseta por el Gobierno, o el organismo competente, para llevarlas a cabo.

Por lo tanto, en la política de empleo influyen desde programas concretos de pequeña cuantía, poco ambiciosos, para un colectivo determinado, hasta las grandes opciones de política económica.

Creemos que el Parlamento, este Congreso de los Diputados, tiene derecho a saber qué está pasando y qué ha pasado en un año con

las medidas de fomento del empleo; qué se ha decidido aplicar a lo largo de ese año y qué es lo que debe hacer esta Cámara; cómo debe orientar esta Cámara la tarea del Ejecutivo, señalándole por qué camino debe ir la labor del Ejecutivo el año próximo para corregir los defectos observados en la aplicación de esa política de empleo, destinar más o menos fondos a las medidas que se han mostrado buenas, menos buenas o malas para los objetivos de ese fomento del empleo, y control del desarrollo práctico que el Ejecutivo, o los órganos que de él dependan, están haciendo de esas medidas.

Por ejemplo, hay medidas sobre las que el Gobierno se encarga muy mucho de hacer llegar a la prensa que están dando un resultado aparentemente bueno, como las medidas de contratación de jóvenes, donde el señor Ministro de Trabajo dice que han pasado ciento no sé cuantos mil jóvenes en los pocos meses de año que han pasado. Nosotros también hemos preguntado, sin respuesta, al Ministro de Trabajo cuántos de esos jóvenes que han pasado por ese programa tienen hoy un puesto de trabajo y cuántos de esos jóvenes que están hoy contabilizados de haber pasado por ese programa no tienen hoy puesto de trabajo, porque era el contrato de cuatro o seis meses y ya se les había acabado. Lo mismo podemos decir de programas de contratación de trabajadores que venían percibiendo el seguro de desempleo.

Hay también otros programas de fomento del empleo aprobados unilateralmente por el Gobierno, cuyos resultados se pueden encontrar en algunos informes más o menos officiosos u oficiales, pero no públicos, del Ministerio de Trabajo o de otros organismos del Gobierno. Nos encontramos con determinados programas que llevan meses en aplicación y que han creado 98 puestos de trabajo a la fecha de 30 de abril, creo recordar, y me estoy refiriendo en concreto al programa de El Vallés, el cual ha mencionado un representante del Grupo Centrista por la mañana como ejemplo de medida para determinadas zonas, etc. Noventa y ocho puestos de trabajo, con una subvención de 300.000 pesetas por cada uno de ellos.

Creo que éste es un ejemplo concreto de que esta Cámara debe analizar qué progra-

mas de fomento del empleo son útiles para el objetivo que pretenden y cuáles deben seguir siendo objeto de atención por parte del Gobierno y por tanto deben recibir la necesaria financiación y dotación de recursos por parte de los Presupuestos del Estado. Hay otros programas, por mucho que se nos repitan sus títulos, que no sirven para nada, porque están mal concebidos o porque el colectivo que debía recibirlos y hacer uso de ellos creando puestos de trabajo, por las razones que sea, no lo está haciendo, por lo que habrá que pensar en otros mecanismos.

Esta es una de las razones de nuestra enmienda. Hay otras más de fondo en las que no voy a entrar ahora, como por ejemplo que parece que las intenciones del Gobierno son de promocionar aquellos programas de fomento del empleo que van dirigidos a la contratación de trabajadores que ya perciben las prestaciones por desempleo, con lo cual, a la vez que se crean puestos de trabajo, se deja de pagar un seguro de desempleo al trabajador, porque ya empieza a cobrar un salario y lógicamente no tiene derecho a doblar la prestación. Pero con la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo que tenemos hoy en este país (un libro recientemente publicado por el Ministerio de Trabajo, o por el Instituto de Estudios Sociales, demuestra ya desde la página 3 ó 4, en el prólogo, que es la tasa de cobertura menor de todos los países que nos rodean), en términos globales, quizá se puedan decorar las cifras, pero en términos referidos a la tasa de cobertura, menor que la de todos los países que nos rodean, resulta que estamos dejando de la mano a unos trabajadores que hace ya más tiempo que no tienen trabajo, porque han dejado incluso de cobrar las prestaciones por desempleo; no estamos dirigiendo a este colectivo de trabajadores especialmente perjudicado, dentro del problema global que supone no tener un puesto de trabajo, programas específicos para que éstos se vean bonificados o fomentados en su contratación por determinadas empresas o por circunstancias concretas.

Hay otras razones más de crítica y de necesidad en cuanto a que esta Cámara analice los programas de fomento del empleo, como es hacernos la pregunta de si con estos

programas que en general también llevan a que la contratación sea por tiempo determinado, es decir, un contrato por seis u ocho meses, no estaremos creando un mercado de trabajo privilegiado para los trabajadores que tienen un puesto de trabajo por tiempo indefinido y que tienen una cierta protección para no ir al desempleo, existiendo aquellos colectivos de trabajadores que no tienen estas perspectivas fáciles de llegar a conseguir un empleo y que hipotéticamente sólo podrán conseguirlo por vía de estos contratos de duración determinada, con lo cual se introduce un círculo vicioso, que es trabajo por seis meses y seguro de desempleo, si algo no lo remedia, por tres meses, que proponen ustedes, habiendo cotizado seis. Así, se encuentra un nuevo mercado de trabajo secundario y profundamente discriminatorio. Con lo cual aparentemente están ustedes diciendo que el programa de contratación de jóvenes va a beneficiar a los mismos, y resulta que lo que está haciendo es marginarlos aún más, relegándolos a la imposibilidad de que nunca, o casi nunca, o tal vez sólo algún pequeño porcentaje de jóvenes, puedan llegar al contrato de trabajo por duración indefinida.

Por todas estas razones y por otras más, algunas de las cuales han sido mencionadas por el señor Pérez Royo, que comparto, nuestra enmienda pretende, primero, que todos los programas de fomento del empleo vayan incluidos en un programa global para que se pueda analizar la situación de conjunto; segundo, que ese programa global sea analizado por esta Cámara, porque siendo programas que cuentan con una financiación pública, deben ser discutidos por esta Cámara; tercero, como es lógico, que la época de presentación por parte del Gobierno de estos programas y de discusión por parte de esta Cámara del programa anual de fomento del empleo coincida con la presentación, debate y votación de los Presupuestos Generales del Estado.

El señor PRESIDENTE: Para defender el dictamen de la Comisión y consumir un turno en contra de las enmiendas presentadas al artículo 5.º, tiene la palabra el señor Fernández Arias.

El señor FERNANDEZ ARIAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nos encontramos en la discusión del artículo 5.º, que son los programas nacionales de empleo.

El Partido Socialista Obrero Español, así como el Partido Comunista, defienden la tesis de un programa único anual. El Partido del Gobierno y el propio Gobierno defendemos la tesis de programas nacionales diversos, porque consideramos que la política de empleo no es lo mismo en todo el contexto de los 365 días del año, porque se pueden dar las circunstancias de que o bien en una zona geográfica o bien en un sector, en un momento dado, haya que poner en marcha una política de empleo para sacar ese sector o esa región de una crisis de desempleo. Por ello es necesario el no ir a un programa único de empleo, que sería un programa anual general, sino que debe de irse a una serie de medidas que deben de ser tomadas en cualquier momento del año. Y para esa crisis sectorial o de zona, para ese tema de desempleo, es cuando se necesitan medidas temporales. Así lo vemos también en el Derecho Comparado, en que en todos los países tenemos medidas temporales contra el desempleo.

Por eso nosotros (esto ya lo discutimos y está reflejado en el I Congreso de UCD) creemos que se debía de ir a programas nacionales y a la aplicación en los momentos adecuados de esos programas.

Aquí se ha dicho que estos decretos que hay en este momento sobre el empleo juvenil o empleo de la mujer están oscurecidos y que la opinión pública no ha llegado a ellos. Yo debo decir que esto no es así, puesto que los medios de comunicación están ahí, la propaganda que se ha distribuido por todo el país está ahí y los miles de trabajadores que han sido empleados están ahí.

El señor Almunia hacía una pregunta: cuántos de esos jóvenes estarían en desempleo. A lo mejor ninguno, a lo peor un tanto por ciento muy elevado de esos muchachos que han tenido empleo.

Lo que ha hecho el decreto es crear, es poner en marcha algo que pueda crear empleo a esos jóvenes o a esas mujeres. Lo que no puede hacer el Gobierno, ni puede hacer ningún partido, ni pueden hacer unas Cámaras, es obligar al empresario, a las empresas, a

que cojan a esos muchachos o a esas mujeres. Pero ahí está la protección para la creación de puestos de trabajo, y eso es uno de los modos por los que se puede crear empleo. Y se ha creado empleo, efectivamente, aunque por un movimiento vegetativo es lógico que salgan más jóvenes al mercado de empleo y no haya empleo en estos momentos para todos esos jóvenes. Pero que este decreto ha tenido una parte afortunada en sus medidas, eso no se puede discutir, porque son varios los miles de trabajadores que han tenido esos empleos.

El Grupo Comunista habla de un Consejo al que se refiere el artículo 131 de la Constitución, número 2. Es lógico que esto se desarrolle en su día, y se desarrolle por ley, y es cuando se sabrá qué es lo que debe hacer ese Consejo. Lo que nosotros no creemos oportuno es admitir ahora que este Consejo vaya en esta Ley de Empleo, porque en el desarrollo del artículo 131, 2, se dirá por estas Cortes qué es lo que debe hacer ese Consejo. En el momento que ese artículo se desarrolle será el momento adecuado de hablar de este Consejo.

Se dice, y se ha dicho aquí, que tanto el Partido de UCD como el Gobierno no le tienen un respeto a las Cortes, sino que le tienen miedo a las Cortes. Yo creo que no, que no es así. Nosotros deseamos, y así lo hacemos, el venir a discutir nuestras leyes en las Cortes; deseamos que las Cortes respalden nuestras leyes, respalden aquellas leyes que sean un beneficio para todos los españoles. Esto es lo que nosotros deseamos. Nosotros no estamos gobernando al margen de las leyes. Lo que sí cabe es que estemos gobernando con unas leyes que hasta el momento están saliendo más con las ideas de UCD, con los programas de UCD, que con los de otros Partidos. Pero lo que es indudable es que nosotros estamos gobernando con las leyes que están saliendo de estas Cortes, y cuando las leyes salen de esta Cortes son de todos los Partidos políticos, hayan sido los votos afirmativos o negativos. Una ley que sale de las Cortes no es una ley de UCD, aunque haya sido ésta a lo mejor quien la ha propuesto. Nosotros, por tanto, colaboramos, trabajamos y deseamos estar dentro de las leyes que salen de estas Cortes.

Debo decir también al señor Almunia que, efectivamente, las Cámaras están aquí para pedir, para exigir al Gobierno que diga qué ha pasado con las medidas que salgan de ahora en adelante sobre el empleo juvenil, de la mujer o de todo el sector del desempleo español. Para eso están las Cortes. Pero los Partidos que están en las Cortes lo que tienen que hacer es dejar desarrollar la ley y dejar que el Gobierno ponga en práctica estas leyes y sus decretos temporales para ver si han dado resultado o no. Habrá luego momentos en que haya que modificar los decretos y hasta las leyes, porque a lo mejor no han dado los resultados apetecidos. Pero no se puede dejar de decir que la opción del Gobierno, y del Partido que apoya al Gobierno, es que estos decretos o estas leyes lo que van es en función de crear puestos de trabajo para estos desempleados. Como decimos siempre, y vuelvo a repetir, hay que dar un margen de espacio para ver qué es lo que pasa con el desarrollo de estos decretos y qué pasa con las medidas que el Gobierno pone en marcha.

Por todo esto, nos oponemos a este plan único y, en cambio, sí protegemos y deseamos los planes diversos que se pueden proponer durante una crisis en un sector o en una zona territorial. Esta es la medida del Gobierno y la que va a defender, porque creemos que estamos en la línea objetiva de que esto es lo que apoyarán aquellas personas que están en desempleo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las palabras del señor Fernández Arias francamente no nos han convencido, y creo que difícilmente podrían convencernos, puesto que no han ido de ninguna manera a lo que era nuestra argumentación en relación con el voto particular que hemos defendido anteriormente. En cambio, ha entrado en otras cuestiones en las que yo no voy a entrar, porque no merece la pena. Pero sí quiero dar algunas pinceladas sobre el tema.

El señor Fernández Arias nos ha hablado de las excelencias de los planes sectoriales de empleo, actualmente en curso por parte del

Gobierno, y nos ha dicho que se han creado puestos de trabajo y que se ha generado empleo con cargo a esos planes. Afortunadamente para él, se ha cuidado mucho de hacer las cuantificaciones pertinentes, y más todavía se ha cuidado de recordar la cuantificación que de manera reiterada se hizo en esta Cámara con ocasión del debate del Estatuto de los Trabajadores (yo lo recuerdo, Sus Señorías lo recordarán también), cuando se decía, una y otra vez, que el Estatuto de los Trabajadores globalmente considerado iba a generar 1.000 puestos de trabajo diario. Hoy el señor Fernández Arias no ha dicho eso; nos ha dicho que los empleos están ahí. Los que están ahí, señor Fernández Arias, son los 1.500 parados más cada día. Pero insisto en que en este tema no voy a entrar, porque ya saldrá naturalmente con ocasión del debate.

El tema específico era el problema de cómo se articulan los programas nacionales de empleo a que hace referencia el artículo 5.º El señor Fernández Arias nos dice que no se puede hacer un programa único, porque en definitiva un año es demasiado tiempo para prever. Señor Fernández Arias, en un año se planifican todas las actividades del sector público, con los Presupuestos Generales del Estado, y me reconocerá que la actividad global del sector público es ciertamente algo al menos tan complejo como el problema de las previsiones de empleo y de los planes nacionales de empleo.

Por otra parte, nada se opone al programa nacional de empleo que nosotros propugnamos, al tipo de programa que nosotros propugnamos. No se opone en absoluto a esta idea una idea de flexibilidad de la planificación, de mecanismos de control y seguimiento para corregir sobre la marcha las desviaciones que contra el plan se puedan producir, mediante las técnicas que, por otra parte, se producen en cualquier tipo de planificación, y vuelvo a remitirme a los Presupuestos Generales del Estado. Naturalmente que los Presupuestos Generales del Estado necesitan de un seguimiento, realizado en este caso por la propia Cámara que aprueba los Presupuestos, para efectuar las correcciones pertinentes como consecuencia de las desviaciones que en relación a esa planificación se producen inevitablemente.

Nos ha dicho que no se puede hablar del

Consejo Económico y Social porque aún no está legislado. Ese es un argumento extraño, en primer lugar porque, como he dicho anteriormente, la no existencia de legislación sobre este tema incumbe fundamentalmente a la responsabilidad del Gobierno. Le voy a citar, además, un documento del propio Gobierno, la propia respuesta del Gobierno a la pregunta sobre el presunto plan de inversiones para Andalucía, que citaba esta mañana en la tribuna, en la cual el Gobierno, después de reconocer que no tiene un programa global de inversiones, dice que para realizar ese plan habrá que desarrollarlo a través de las instituciones que la Constitución tiene previstas y, naturalmente, el Consejo Económico y Social. Es decir, que es el propio Gobierno el que se refiere al Consejo Económico y Social, aunque no esté creado, porque evidentemente el hecho de que el Consejo Económico y Social no esté creado todavía, no exista una ley constitutiva, no significa que no podamos prever como una de sus funciones naturales precisamente ésta, porque si no va a desarrollar estas funciones ya me dirá usted qué tipo de funciones va a desarrollar el Consejo Económico y Social.

Sea cual sea la estructura del Consejo, es evidente que de esta planificación sectorial del empleo el Consejo tendrá que ocuparse, puesto que ésa es la idea con la que nace en la Constitución el Consejo Económico y Social; la planificación es una concreción perfectamente establecida en la Constitución.

Por último, ha dejado sin respuesta lo que era nuestro argumento fundamental, es decir, la necesidad de traer esos planes a este foro, a las Cortes Generales, dándonos sencillamente unas afirmaciones genéricas de que UCD gobierna con las leyes y que cumple las leyes. No voy a entrar ahora a discutir si UCD gobierna con leyes, con decretos-leyes, si cumple o no cumple las leyes. No se trataba de eso. Lo que proponíamos no era que UCD cumpliera las leyes. Estaría bueno que viniéramos a pedir cosas de este cariz. Pedíamos algo mucho más simple, y es sencillamente que el programa nacional de empleo sea un programa aprobado democráticamente, puesto que si es un programa que tiene implicaciones para el conjunto de la sociedad española, que tiene implicaciones financieras

de las cuales difícilmente pueden abdicar estas Cortes en sus prerrogativas constitucionalmente reconocidas en relación con las mismas, ese programa nacional de empleo, para ser un programa elaborado democráticamente, debía venir al foro que mayores garantías democráticas (de composición democrática de los intereses entre las diferentes clases sociales) ofrece, que son precisamente estas Cortes Generales.

Nada más que eso es lo que pedía nuestra enmienda y, lamentablemente, tengo que decir que el señor Fernández Arias no ha respondido a esta objeción fundamental que nosotros hacíamos al artículo 5.º del dictamen.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.

El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, brevemente para decirle cuatro cosas al señor Fernández Arias. En primer lugar, que el hecho de pedir en nuestra enmienda un programa anual no se contrapone con la posibilidad de, en un momento determinado, proponer o decidir aplicar medidas de urgencia. Esto usted lo sabe perfectamente, igual que lo saben los Diputados de los otros Grupos Parlamentarios. Lo que pasa es que ustedes no tienen ningún interés en que el Parlamento fiscalice su acción en muchas materias y, entre otras, en este programa de fomento del empleo, que a veces incluso les gusta capitalizar, como han hecho con determinados anuncios en la Prensa, etc.

En cambio, no nos contestan a una pregunta que le he hecho y se ha desviado a otros temas. Cuántos de los jóvenes que han pasado ya o se han beneficiado del programa de contratación de jóvenes siguen conservando puestos de trabajo, no cuántos de los jóvenes que existen sin puestos de trabajo se han beneficiado del programa, que eso ya lo sabemos. Cuántos de los que se han beneficiado siguen con puestos de trabajo, para que sepamos qué efectos a medio plazo tienen esos programas, o si se trata simplemente de un plazo en que se les da trabajo, por cuatro meses, y al cabo de cuatro meses se acabó lo que se daba. Ese no es argumento, señor Fernández Arias.

En segundo lugar, usted dice que el Gobierno no puede obligar a las empresas a con-

tratar, por muchos programas de empleo que haya. Eso lo sabemos nosotros perfectamente, igual que usted. Nosotros lo que estamos diciendo es que los programas que se vienen aplicando, unos tienen mejores resultados y otros peores y que hay que revisarlos; que creemos que el órgano que debe revisarlos no es el Consejo de Ministros o el Ministerio de Trabajo, sino que esa revisión de programas para decidir cuáles de ellos deben seguir y cuáles no, porque no tienen efectividad práctica, cuáles de los que siguen adelante necesitan más financiación y cuáles menos en función de los defectos que se hayan observado, debe ser debatido aquí. Eso es lo que dice nuestra enmienda.

El propio Presidente del Gobierno, en su discurso del debate nacional del 21 de mayo, dijo en su intervención, al hablar de los temas del empleo y del paro, que los programas de empleo para colectivos específicos deberían ser revisados. Pues esa revisión, porque hay unos que funcionan menos bien y otros peor, hay que hacerla aquí. Eso es lo que dice nuestra enmienda.

Usted ha citado en un momento dado el Congreso de UCD, y por ahí podía llevar la discusión muy lejos. Usted no ha dicho cuántos parados nuevos hay después de la organización del Congreso de UCD. Mis cálculos, a toda velocidad, dan algo así como 350.000, a pesar de los programas, señor Fernández Arias.

Por último, ha dicho una cosa en la cual no estamos de acuerdo. Dice usted que las Cortes están para pedir información. No, señor Fernández Arias, el Parlamento, aparte de pedir información, está para decidir la política de este país, porque somos los representantes de la soberanía popular. No estamos sólo para recibir información; estamos para recibir información, para controlar al Ejecutivo y para decidir por mayoría, eso sí, las opciones de la política de este país. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Arias.

El señor FERNANDEZ ARIAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar, quería contestar al señor Pérez

Royo que en esta ley existe un Consejo General y una Comisión Ejecutiva; en el artículo 40 viene. Y vuelvo a decirle lo que le dije antes, y es que cuando se sepan las funciones de ese Consejo Económico-Social, que por ley se tienen que desarrollar, sabremos cuál es la función de ese Consejo General.

A Joaquín Almunia voy a decirle que estamos de acuerdo en que cada vez aumenta más el desempleo y cada vez son más los emigrantes que están introduciéndose en el país, y en una política que tiene que crear puestos de trabajo estamos inmersos todos, está el Gobierno, están los partidos, está la sociedad, están las Centrales Sindicales y las Organizaciones Empresariales, y cada uno tiene su responsabilidad en la creación de puestos de trabajo. Con esto quiero decir que todos somos responsables y no vamos a empezar a medir la responsabilidad que tiene cada una de estas familias que componen el país. Es también muy interesante ver el comportamiento de cada uno en este tema; es muy importante observarlo.

No creo que dijera antes que a través del Parlamento los partidos estén para pedir información. Los partidos no están para pedir solamente esto, sino que todos sabemos que en el Parlamento lo que se hace es legislar, pero también hay unas vías por las que se puede pedir al Gobierno que diga qué es lo que ha hecho en una determinada opción de su política. Esto es lo que yo le decía anteriormente.

Y volvemos a hablar de los programas del Gobierno en política de empleo. En un momento preciso se deben tomar medidas, y por eso nosotros optamos por esas vías de programas nacionales, no de un programa único, porque no existe. Lo que sí es verdad es que en los Presupuestos Generales hay que discutir, efectivamente, los programas de empleo, y ahí están los Presupuestos que van a la protección del Fondo Salarial.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Sometemos a decisión de la Cámara, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 5.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 135; en contra, 161; abstenciones, cuatro; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 5.º

Seguidamente sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista del Congreso, también referida al número 1 del artículo 5.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 141; en contra, 156; abstenciones, tres; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto del número 1 del artículo 5.º

Sometemos a votación el número 1 del artículo 5.º en primer lugar. (El señor Zapatero pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Zapatero.

El señor ZAPATERO GOMEZ: Únicamente para pedir la votación del número 3 por separado.

El señor PRESIDENTE: Entonces votaremos el 1 y el 2 juntos y el número 3 por separado.

Señores del Grupo Comunista, ¿podemos votar, puesto que les afecta, conjuntamente los números 1 y 2 del artículo 5.º? (Asentimiento.)

Entonces procederemos a la votación conjunta de los números 1 y 2 del artículo 5.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 163; en contra, 128; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los números 1 y 2 del artículo 5.º en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.

Seguidamente sometemos a votación el número 3 de este mismo artículo 5.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 296; en contra, tres; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el número 3 del artículo 5.º

Todo el artículo 5.º queda aprobado, según las votaciones anteriores, conforme a los términos del dictamen de la Comisión.

Enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Comunista, en relación con el artículo 6.º

Artículo 6.º

Tiene la palabra el señor Pérez Royo, para la defensa de su enmienda.

El señor PEREZ ROYO: Para una breve defensa de nuestra enmienda número 15, que, como habrán observado Sus Señorías, consiste en eliminar del eventual deber de colaboración a que se refiere el artículo 6.º a los trabajadores desempleados que perciben el Seguro de Desempleo, dejando reducido, en consecuencia, este eventual deber únicamente a aquellos que perciben la prestación asistencial o el subsidio.

La razón de esta enmienda radica en la naturaleza diferente del Seguro de Desempleo propiamente dicho y de la prestación asistencial o subsidio. El Seguro de Desempleo es lo que podríamos llamar un derecho adquirido, una prestación en cierta medida de carácter sinalagmático a la que se tiene derecho como consecuencia de la cotización y, en consecuencia, nos parece que pugna con el sentido de este derecho de esta prestación, de esta situación, el establecer estos deberes de colaboración a que se refiere el artículo 6.º No así para el subsidio, que tiene una base jurídica y social absolutamente diversa, basada en el puro carácter de la solidaridad.

En segundo lugar, nuestra enmienda propone eliminar de los posibles organismos que concierten estos deberes o tareas de colaboración social a los organismos privados, aunque sean de carácter benéfico-asistencial sin ánimo de lucro.

La razón de ser de esta proposición de nuestra enmienda radica en las fáciles corruptelas a que puede prestarse una disposición de esta naturaleza.

Finalmente, nuestra enmienda reclama que en los trabajos de colaboración social, en los

conciertos que rijan esos trabajos de colaboración a que se refiere el mencionado artículo 6.º, sea participe el Instituto Nacional de Empleo. ¿Cuál es la razón de ser de esto? La razón de ser la hemos indicado con ocasión de anteriores enmiendas y será repetida con ocasión de otras, porque es la que informa todo el sentido general de nuestras enmiendas. Esa razón de ser es permitir la participación en el control de estos conciertos de los directamente interesados, de las Centrales Sindicales y de las Patronales representadas en los órganos del Instituto Nacional de Empleo, con la finalidad de prevenir los posibles abusos y las posibles desviaciones que pueden producirse con ocasión de los mismos. Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Coalición Democrática respecto de este artículo 6.º Tiene la palabra el señor Senillosa.

El señor DE SENILLOSA CROS: Señor Presidente, Señorías, después del debate en Comisión, donde fue rechazada la enmienda número 4 de Coalición Democrática al artículo 6.º, que añadía una letra e) exigiendo una condición más para que el trabajador desempleado pudiera ser obligado a realizar un trabajo a las que ya estaban en el dictamen, o sea: Que sea utilidad social y redunde en beneficio de la comunidad; que se concierte con un organismo, público o privado, de probada utilidad social y sin ánimo de lucro, o privado de carácter benéfico o asistencial sin ánimo de lucro; que tenga un carácter temporal, y que se realice en el ámbito de la Oficina de Empleo en la que esté registrado. Nosotros añadíamos una condición además, la de que coincidiera con la especialidad profesional del trabajador desempleado.

Después de ser rechazada hemos buscado una fórmula que retocara nuestro texto sin desvirtuar el sentido profundo de nuestra enmienda, pero que pudiera ser aprobada por este Pleno, si es que el señor Presidente y Sus Señorías tienen la bondad de no oponerse a esa transacción que pienso es constructiva.

Entendemos también que el nuevo texto que ahora leeré está más acorde con el con-

cepto de colocación adecuada de que nos hablará más adelante el artículo 23 del dictamen. Dice así nuestro texto, que someteremos a votación: «Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado».

No quiero obligar a Sus Señorías a que pierdan su tiempo escuchando una minuciosa descripción y explicación de lo que dice y quiere decir exactamente nuestro texto, que está muy claro. Aquí no hay trampa ni cartón. No queremos que un trabajador parado, por mucho que los trabajos de colaboración que realice redunden en beneficio de la comunidad, sea obligado a hacer un trabajo que no esté de acuerdo con sus aptitudes físicas y profesionales. Así de sencillo.

Porque no estamos en favor de los empresarios ni de los trabajadores en particular, o, mejor dicho, de los empleadores y de los empleados. Estamos a favor de la dignidad humana, y también a favor de esa empresa común que se llama España y de la que forman parte tanto los unos como los otros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en defensa del dictamen? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Torres.

El señor TORRES IZQUIERDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, para oponerme a la enmienda número 15 del Grupo Comunista por varias razones.

En primer lugar, una concreción de carácter previo. En Comisión se abordó esta enmienda y, en función de la misma, fue ya rectificado el proyecto originario de la proposición de ley. Y como consecuencia de una enmienda transaccional de mi Grupo Parlamentario, sin oposición alguna, con cuatro votos de abstención, fue aprobada.

Entrando ya en el contenido de la enmienda número 15, en primer lugar debemos de manifestar que la mención que se hace de la prestación asistencial nos parece conceptual y técnicamente más deficiente que la del dictamen de la Comisión. Estamos ante una proposición de ley, ante un dictamen de la Comisión que aborda, especialmente en su Título II, las prestaciones del Seguro de Desempleo y del Subsidio, como prestación com-

plementaria, y en este sentido es bueno ceñirnos, dentro de la concepción o dentro del ámbito de actuación de los trabajos temporales de colaboración social, a aquellos trabajadores desempleados que perciben este tipo de prestaciones.

No llegamos a alcanzar, por otra parte, no he llegado a comprender personalmente, las razones de fondo que pueda tener el Grupo Comunista para defender la sustitución del percibo de la prestación de desempleo o el subsidio por la prestación asistencial. Pero, si este punto tiene importancia, pienso que fundamentalmente la enmienda número 15 tiene una razón de fondo, y es pretender que el requisito b) del artículo 6.º, es decir, que el requisito, para que pueda haber trabajos temporales de colaboración social, sean unos trabajos concertados exclusivamente con organismos públicos y no así con organismos o entidades privadas, aunque sean éstos de probada utilidad social y sin ánimo de lucro, o bien tengan carácter benéfico, o asistencial, asimismo sin ánimo de lucro. Respecto a este punto pienso que es bueno no perder de vista la filosofía de fondo de los trabajos temporales de colaboración social.

Subyace en todo este artículo que aquellas personas que reciben unas prestaciones por parte de la sociedad, en este caso unas prestaciones por desempleo, deben de tener una permanente disposición a prestar los servicios de utilidad social que la sociedad o comunidad en que viven le demande.

Es, en definitiva, una filosofía que está inspirada por un principio claramente de solidaridad social, y en ese sentido, digo, es bueno no perder de vista ese espíritu. ¿Y por qué hago este comentario? Hago este comentario porque, en el fondo, lo que pienso que hay que garantizar por la redacción de este artículo no es tanto la forma jurídica o la naturaleza jurídica de las entidades u organismos con los que se concierte este tipo de trabajo, sino que fundamentalmente lo que hay que garantizar es el adecuado fin, el destino adecuado de estos trabajos. Que estos trabajos, en definitiva, tal como dice la letra a) de este artículo, sean verdaderamente de utilidad social y redunden, en todo caso, en beneficio de la comunidad.

Y si esto es así, yo me preguntaría por

qué una postura o una predisposición apriorística por parte del Grupo Comunista, contra las entidades privadas, por qué razón apriorística, asimismo, una entidad privada tiene que ser, por definición, al parecer, menos fiable que un organismo o una entidad de carácter público. Pienso que no hay una explicación lógica, y si la hay, me temo que en el fondo late una desconfianza del Grupo proponente de esta enmienda hacia los organismos o entidades privados. Si esto fuera así, latiría una desconfianza, en definitiva, hacia el hombre, individualmente considerado.

Pienso, en definitiva, que si el Grupo proponente hubiera reflexionado un poco sobre el alcance de esta enmienda, sinceramente creo que la hubiera retirado, no la hubiera defendido, porque, evidentemente, habría un trasfondo de dudosa constitucionalidad.

Por tanto, si el objetivo realmene es garantizar la finalidad, el resultado final de estos trabajos, pienso que las garantías tienen que ir, por una parte, por los propios requisitos que establece el artículo 6.º, para que quepa un trabajo de colaboración social con el destino en beneficio, insisto, de la comunidad, y con un destino no lucrativo, con un destino absolutamente benéfico o asistencial. Y, por otra parte, esta garantía tiene que estar fiscalizada, tiene que estar controlada por los servicios de empleo.

El tercer aspecto que trata la enmienda número 15 es la supresión de la calificación social, en el último párrafo de este artículo. En este sentido, y sobre este punto, indicar que, por nuestra parte, no existe ningún inconveniente. Pensamos que con esta supresión no se desvirtúa en absoluto la naturaleza jurídica de este tipo de trabajos de colaboración social, entre otras cosas porque queda perfectamente recogida en el resto del contenido de este artículo y, además, el espíritu de esta supresión había sido recogido en una enmienda del Grupo Comunista, la enmienda número 14, que indicaba un nuevo título a este artículo.

Por tanto, por nuestra parte no hay ningún inconveniente, y ya, desde este momento, señor Presidente, solicito votación separada respecto a este punto.

Finalmente, por lo que hace referencia al último punto de la enmienda comunista de

modificación del artículo 6.º del dictamen de la Comisión, la inclusión de que en estos conciertos participara el Instituto Nacional de Empleo, pienso que es absolutamente innecesario, por cuanto el propio Instituto Nacional de Empleo es el que podrá exigir de todo trabajador desempleado este tipo de trabajo, de colaboración social y, en definitiva, sería, desde nuestro punto de vista, una reiteración.

Señor Pérez Royo, yo quisiera, finalmente, insistir en que no hay ninguna, absolutamente ninguna razón de ser para la motivación que tiene esta enmienda, en el sentido de que el hecho de que actúen o intervengan en los conciertos de los trabajos de colaboración social entidades privadas podría dar lugar a numerosas corruptelas. No estamos, en absoluto, de acuerdo con la filosofía de esta enmienda.

Respecto a la enmienda defendida por el Diputado señor Senillosa, indicar brevemente nuestra absoluta coincidencia. Entendemos que es una enmienda que perfecciona el texto del artículo 6.º; que es una enmienda claramente progresista desde nuestra concepción; que existen razones fácticas y profesionales que justifican el que se introduzca este apartado de la enmienda solicitada por el Grupo de Coalición Democrática.

Asimismo manifestar que, tal como el propio señor Senillosa ha manifestado, es coherente con el texto del dictamen de la Comisión en su artículo 23, y, además, es coherente con la recomendación 44 de la Organización Internacional de Trabajo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Para una breve rectificación e indicar al señor Diputado de UCD que ha respondido a nuestra enmienda que nosotros nos ratificamos en cuanto al carácter de derecho adquirido que tiene ese Seguro de Desempleo propiamente dicho y que lo distingue de la prestación asistencial, y en eso gravita uno de los fundamentos de nuestra enmienda.

En segundo lugar, efectivamente, nosotros tenemos una desconfianza fundada a intro-

ducir como beneficiarios de estos trabajos eventuales de colaboración a entidades privadas, a las cuales se define genéricamente como de carácter benéfico o asistencial sin ánimo de lucro. El problema es muy sencillo. Nosotros más que desconfianza hacia los organismos privados, lo que tenemos es una seria desconfianza a que se haga negocio con el paro. Así de simple. Los ejemplos que podrían ponerse de propuestas en este sentido son muy variados. Yo podría ponerle diversos ejemplos de propuestas en este sentido en relación a un tema en el cual ya tiene aplicación: trabajos de naturaleza análoga a la que se prevé en este artículo, como es el sistema de empleo comunitario. Podría poner ejemplos claros de propuestas absolutamente desviadas en el sentido que acabo de indicar. Evidentemente, insisto, el problema no es tanto de desconfianza hacia los organismos privados como hacia que se hagan negocios con el paro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres Izquierdo.

El señor TORRES IZQUIERDO: Señor Presidente, simplemente para insistir en que es absolutamente inaceptable el considerar que puede haber corruptelas por parte de entidades privadas, como una concepción apriorística de carácter generalizado.

En segundo lugar, dejar perfectamente claro que no cabe negocio, que el negocio lleva consigo implícito la finalidad o el ánimo de lucro, y que queda absolutamente claro y literal que no es posible ese ánimo de lucro.

Finalmente, indicar que el propio defensor de la enmienda ha manifestado que podría mencionar diversos ejemplos, pero no ha manifestado ninguno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Pregunto, en primer lugar, a los distintos Grupos Parlamentarios si se admite a trámite la enmienda de aproximación presentada por el Grupo Parlamentario Coalición Democrática. (Pausa.)

No hay objeción y queda, por tanto, admitida a trámite.

Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Comunista, salvo en la letra d), que será objeto después de votación separada. De manera que enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, salvo la letra d).

El señor TORRES IZQUIERDO: Señor Presidente, entiendo que es salvo el último párrafo. Más que la letra d), el último párrafo del artículo 6.º

El señor PRESIDENTE: Es decir, la referencia «Los trabajos de colaboración social estarán sujetos a los conciertos que lo establezcan, y en éstos participará el Instituto Nacional de Empleo». Este es el párrafo respecto del cual ha pedido votación separada.

Respecto de este párrafo, el Grupo Parlamentario Comunista ha propuesto que se elimine el calificativo «social». De manera que se someterá a votación después el párrafo que hemos leído quitando la palabra «social»; es decir, el párrafo quedaría así: «Los trabajos de colaboración estarán sujetos», etc.

Pues bien, salvo este párrafo, se somete a votación el texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Comunista, en la parte que ha sido sometida a votación.

Sometemos a continuación a decisión de la Cámara la aceptación o rechazo del último párrafo de la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista con la modificación señalada, que supone la eliminación del calificativo «social».

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 294; en contra, cinco; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la última parte de la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Comunista.

Sometemos a votación seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática en la versión transaccional, que ha sido admitida a trámite con anterioridad y que supone la incorporación de una nueva letra, que sería la e).

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 299; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática en su versión transaccional y su contenido incorporado al texto del artículo 6.º

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 6.º conforme al dictamen de la Comisión, quedando entendido que, caso de aprobarse, llevará incorporado el contenido de las enmiendas ya aprobadas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 174; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 6.º en los términos del dictamen de la Comisión e incorporando el contenido de las enmiendas aprobadas con anterioridad.

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 7.º, respecto del cual no hay mantenidas enmiendas. **Artículo 7.º**

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 298; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 7.º en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

VOTACION DE CONJUNTO DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LIBERTAD RELIGIOSA

Vamos a proceder seguidamente a la votación de conjunto del proyecto de Ley Or-

gánica de Libertad Religiosa, votación de conjunto exigida por su carácter orgánico.

El texto que se somete a votación es el que en su día fue aprobado ya en votación de conjunto por el Pleno de este Congreso, incorporando las enmiendas del Senado que han sido aceptadas en votación ordinaria en la sesión de la mañana.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 294; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada definitivamente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con el texto resultante de incorporar las enmiendas del Senado aprobadas esta mañana al texto que en su día fue aprobado ya por este Congreso de Diputados.

Por el Secretario de la Cámara se van a

leer avisos en relación con las Comisiones de mañana.

El señor SECRETARIO (Torres Boursault): Con la venia, señor Presidente. Las Comisiones que a continuación se indican, cuya reunión estaba prevista para mañana, han tenido los siguientes cambios de hora:

Comisión de Interior. Se reunirá a las 9,30, en lugar de a las 11 horas.

Comisión de Investigación sobre presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco y en la prisión de Herrera de La Mancha. Se reunirá a las 9,30, en lugar de a las 10,30 horas.

Comisión de Defensa. Se reunirá a las 10,30, en lugar de a las 11 horas.

El señor PRESIDENTE: El Pleno continuará mañana, a las once y media de la mañana. Hasta entonces se levanta la sesión.

Eran las siete y diez minutos de la tarde.

Precio del ejemplar 50 ptas.
Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (6)

Depósito legal: M. 12.590 - 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID